



**UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN DERECHO**



**“SITUACIÓN ACTUAL DEL DELITO DE TRATA DE
PERSONAL EN EL PERÚ”**

TESIS

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN
CIENCIAS PENALES**

AUTORA:

MARIELENA DE JESUS ORDINOLA REYES

ASESOR:

M.Sc. MARIANO LARREA CHUCAS

LAMBAYEQUE – PERÚ

2019

**“SITUACIÓN ACTUAL DEL DELITO DE TRATA DE
PERSONAL EN EL PERÚ”**

PRESENTADO POR:

**MARIELENA DE JESUS ORDINOLA REYES
AUTORA**

**M.Sc. MARIANO LARREA CHUCAS
ASESOR**

APROBADO POR:

**Dr. AMADOR MONDOÑERO VALLE
PRESIDENTE**

**Dr. FREDDY WIDMAR HERNANDEZ RENGIFO
SECRETARIO**

**Mg. JUAN RIQUELME GUILLERMO PISCOYA
VOCAL**

DEDICATORIA

Dedico la presente
investigación a las víctimas del
delito de trata de personas en
el Perú como en el mundo

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios y a mi familia por permitirme realizar la presente investigación

INDICE

CAPÍTULO I: ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO	13
1.1. Situación problemática	13
1.2. Formulación del problema	15
1.2.1. Problema general	15
1.2.2. Problemas específicos	15
1.3. Justificación e importancia	15
1.4. Objetivos de la investigación	17
1.4.1. Objetivo general	17
1.4.2. Objetivos específicos	17
1.5. Hipótesis	17
1.5.1. Hipótesis general	17
1.5.2. Hipótesis específicas	17
1.6. Como surge el problema	18
1.6.1. Descripción de la investigación	18
1.6.2. Antecedentes de la investigación	19
1.6.2.1. A nivel Nacional	21
1.6.2.2. A nivel Local	21
1.7. Tipo y diseño de investigación y análisis	27
1.7.1. Tipo de análisis	27
1.8. Técnicas, instrumentos e informantes o fuentes	27
1.8.1. Técnicas de recolección de datos	28
1.8.2. Instrumentos de recolección de datos	28
1.9. Población y muestra	29
1.10. Forma de tratamiento de los datos	29
1.11. Análisis estadísticos de los datos	29
CAPÍTULO II: MARCO TEORICO	30
2.1. Antecedentes del problema	30

Bases teóricas	36
Sub capítulo I: Antecedentes del Delito de Trata de Personas	36
1.1. Antecedentes históricos y enfoques de abordaje	36
Sup capítulo II: El delito de trata de personas en el contexto contemporáneo..	48
2.1. Etapas de la trata de personas.....	48
2.2. Clases de trata de personas.....	52
Sup capítulo III: Contexto Jurídico del Delitos de Trata de Personas en el Perú	57
3.1. El Delito de Trata de Personas en el Código Penal Peruano	57
3.2. Diferenciación del delito de trata de personas con otros delitos.....	67
3.3. Respecto a la R. N. N°2349-2014 Madre de Dios.	70
3.4. Marcos conceptuales o glosario	72
CAPÍTULO III: ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS	75
3.1. Discusión.....	80
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES.....	84
CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES	86
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	88
ANEXO: ENCUESTA.....	91

RESUMEN

El delito de trata de personas es sin lugar a duda una violación a los derechos humanos que se denota en el contexto nacional e internacional; en ese sentido la presente investigación se desarrolló con la finalidad de determinar si el tratamiento que recibe el delito de trata de personas en la jurisprudencia de la Corte Suprema especialmente en la R.N. Nº 2349-2014-Madre de Dios es el adecuado para la persecución y sanción del mismo, de manera que se esté respetando los convenios internacionales a los que el estado peruano se encuentra suscrito; esto con el objeto que no exista impunidad para las personas que cometen el hecho ilícito, respecto al delito de trata de personas.

Dentro de la problemática actual, se ha evidenciado en el último fallo emitido R.N. Nº 2349-2014-Madre de Dios por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia en la cual se argumentó no se configura la explotación laboral de la víctima que haya trabajado 12 horas como dama de compañía en un bar por cuanto este exceso en la cantidad de horas no implican por sí mismo explotación laboral, por cuanto este concepto se materializa cuando la labor realizada agota la fuerza del trabajador. Esto significa que no solo se debe tener en cuenta la cantidad de horas, sino el tipo de trabajo que se realiza para poder determinar si existe o no explotación laboral de cara al tipo penal de trata de personas; asimismo la Sala Penal de la Corte Suprema manifiesta que tampoco se habría producido la explotación sexual, por cuanto el hacer 'pases' no fue la intención primigenia por la cual fue a trabajar al bar, sino que en una oportunidad la procesada le sugirió que lo haga. De allí que este fue un evento aislado y no la razón por la que la procesada habría llevado a la menor a trabajar a su bar. Para que se configure el delito de trata por explotación sexual, esta tiene que ser la razón por la cual se traslada o capta a la menor desde un inicio. Sin embargo tal sentencia se considera como un precedente de impunidad, pues en hechos similares y posteriores los tratantes no tendrían más sanción.

La hipótesis que esta investigación plantea es respecto a si el tratamiento que recibe el delito de trata de personas en la jurisprudencia de la Corte Suprema no es el adecuado para la persecución y sanción del mismo, por lo que en ese contexto

se analizará la sentencia R.N. N° 2349-2014-Madre de Dios, para proponer un mejor tratamiento al delito de trata de personas, con la finalidad de evitar impunidad.

En consecuencia, los resultados de la presente investigación contribuirán a una mejor regulación e interpretación del delito de trata de personas, a fin de salvaguardar los derechos humanos de la sociedad y su dignidad.

Palabras claves: Sociedad, personas, delito, derechos humanos

ABSTRACT

Human trafficking is, without a doubt, a violation of human rights that is noted in the national and international context; In this sense, the present investigation will be developed to determine if the treatment received by the crime of trafficking in persons in the jurisprudence of the Supreme Court is adequate for the prosecution and sanction of the same, so that international conventions are respected. that the Peruvian state is subscribed; this with the purpose that there is no impunity for the persons who commit the illicit act, with respect to the crime of trafficking in persons.

Within the current problem, it has been evidenced in the last ruling issued RNN⁰ 2349-2014-Madre de Dios by the Permanent Criminal Chamber of the Supreme Court of Justice in which it was argued that the labor exploitation of the victim who has worked 12 hours as a lady in a bar because this excess in the number of hours does not imply labor exploitation by itself, because this concept materializes when the work done exhausts the strength of the worker. This means that not only should the number of hours be taken into account, but also the type of work that is carried out in order to determine whether or not there is labor exploitation for the criminal type of trafficking in persons; also the Criminal Chamber of the Supreme Court states that sexual exploitation would not have taken place either, since making 'passes' was not the original intention for which he went to work at the bar, but on one occasion the defendant suggested that make. Hence, this was an isolated event and not the reason why the defendant would have taken the minor to work at his bar. For the crime of trafficking to be set up for sexual exploitation, this must be the reason why the child is transferred or recruited from the beginning. However, such sentence is considered as a precedent of impunity, because in similar and subsequent acts the traffickers would not have more sanctions.

The hypothesis that this investigation raises is whether the treatment received by the crime of trafficking in persons in the jurisprudence of the Supreme Court is not adequate for the prosecution and punishment of the same, so in this context the RN judgment will be analyzed. N^o 2349-2014-Mother of God, to propose a better treatment to the crime of cake of people, with the purpose of avoiding impunity.

Consequently, the results of the present investigation will contribute to a better regulation and interpretation of the crime of trafficking in persons, in order to safeguard the human rights of society and their dignity

Keywords: Society, people, crime, human rights

INTRODUCCIÓN

En el delito de trata de personas, es menester mencionar que la ONU adoptó instrumentos internacionales para luchar contra el crimen organizado, lo cual varios países del mundo firmaron el acuerdo *Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños*; tal Protocolo fue ratificado por el estado peruano en el año dos mil uno, por lo que posteriormente en el año dos mil siete, se promulgó la Ley N° 28950 con la finalidad de adecuar nuestra legislación al estándar internacional establecido en el Protocolo de Palermo, la cual derogó varios artículos del Código Penal y estableció la política del Estado para luchar contra la trata de personas. Pese a ello, en los últimos años la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de nuestro país ha emitido una serie de sentencias sobre delito de trata de personas, que han sido duramente cuestionadas respecto a lo resuelto en ellas, por la opinión pública nacional y la comunidad transnacional, y es que su tipificación, investigación, juzgamiento y sanción constituyen, además de deberes de la función interna, obligaciones internacionales que comprometen al Estado peruano al ser parte de las respectivas convenciones internacionales que regulan tales conductas.

Ahora bien se analizará el tratamiento que recibe el delito de trata de personas en la jurisprudencia de la Corte Suprema es el adecuado para la persecución y sanción del mismo, por lo cual los resultados de tal determinación permitirá a la presente investigación confirmar o descartar el objeto de estudio.

Así mismo el objetivo general de la presente Tesis es, determinar si el tratamiento que recibe el delito de trata de personas en la jurisprudencia de la Corte Suprema es el adecuado para la persecución y sanción del mismo y; como objetivos específicos establecer si la regulación del delito de trata de personas en la legislación Peruana es adecuada, conocer si la definición que tiene la Corte Suprema del tipo de trata de personas protege a la víctima de este tipo penal y por ende no se atenta contra los derechos humanos, así como Conocer si las sentencia R.N.N° 2349-2014-Madre de Dios de la Corte Suprema ha contribuido a la erradicación del delito de trata de personas, razón por la cual se ha planteado como

hipótesis el tratamiento que recibe el delito de trata de personas en la jurisprudencia de la Corte Suprema no es el adecuado para la persecución y sanción del mismo.

En consecuencia, la presente tesis genera una contribución para una mayor interpretación del delito de Trata de Personas esto con la finalidad de tener Jurisprudencia Peruana que a la luz del derecho internacional eviten la impunidad.

CAPÍTULO I: ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. Situación problemática

La trata de personas es un delito que se encuentra presente en todo el mundo, no hay lugar donde la delincuencia dedicada a este ilegal negocio deje de operar. Miles de personas alrededor del planeta son explotadas anualmente, motivo que explica porque la delincuencia puede tener ganancias dinerarias importantes, convirtiéndose en el tercer delito más difundido del planeta después del narcotráfico y la venta ilegal de armas, hombres, mujeres, niñas y niños de todas las edades y nacionalidades, son desligados de sus hogares para pasar a engrosar la lista de explotaciones que tiene el delito, entre las que se incluyen: la explotación con fines sexuales (considerada la actividad más común), seguida de la explotación laboral, la exposición de personas a peligros (es el caso de la mendicidad), el trabajo doméstico y los matrimonios forzados, por mencionar algunas formas de operación de este ilegal negocio.

Nuestro país también se encuentra infectado por las redes de la trata, siendo considerado como lugar de origen, tránsito y destino de la trata de mujeres internacionales, con predominio de la trata interna; se devela esto como una problemática de carácter nacional, que no solamente afecta a sus ciudadanos, sino que además pone en riesgo la propia seguridad del país, por sus vinculaciones con otros delitos como el narcotráfico o el lavado de activos.

Esta situación llevó al Estado Peruano a publicar la Ley N° 28950- Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y su Reglamento, que modificó varios artículos del Código Penal y estableció la política del Estado para luchar contra este flagelo.

Sin embargo, el papel activo del Estado en esta materia no ha evitado que los casos de trata de personas en nuestro país aumenten, esto se debe a la compleja naturaleza jurídica de este delito y a la dificultad que

se tiene para su comprobación, pues uno de los factores de impunidad es la falta de precisión del bien jurídico protegido, o los bienes jurídicos protegidos.

Esta dificultad no superada, ha sido evidenciada en el último fallo emitido R.N.Nº 2349-2014-Madre de Dios por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en el que libera de culpa a la administradora de un bar acusada de trata de personas en perjuicio de una adolescente, por cuanto se argumentó que la voluntad de la tratante hacia la víctima debía ser expresa y que las horas que trabajó la menor no se podía considerar como explotación porque no hubo agotamiento de ésta. Dicha sentencia de la sala presidida por Villa Stein ha generado traer toda la atención de autoridades, organismos y estudiosos del derecho, quienes han criticado duramente lo resuelto por esta sala, al considerarlo como un precedente de impunidad, pues en hechos similares y posteriores los tratantes no tendrían más que una sanción.

Es así como Yván Montoya, asesor del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) y profesor de derecho de la Universidad Católica asevera que también las dos Salas Penales de la Corte Suprema tendrían graves dificultades al momento de interpretar y juzgar los casos de trata de personas, pues considera que ésta se debería adaptar a los tiempos y a las nuevas formas de explotación laboral y sexual, empero nuestros jueces no lo están haciendo; de manera que esta problemática estaría exigiendo analizar cómo se viene interpretando el delito de trata de personas; en tanto que en un Estado de Derecho como lo es en el Perú, debe actuarse con pleno respeto a las leyes, a la Constitución y por ende a los Tratados internacionales en los que se ha suscrito para la erradicación de este delito.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Es adecuado el tratamiento que recibe el delito de trata de personas en la jurisprudencia de la Corte Suprema para la persecución y sanción del mismo, a raíz de la R.N. N° 2349-2014-Madre de Dios?

1.2.2. Problemas específicos

- a) ¿La regulación del delito de trata de personas en la legislación Peruana es adecuada?
- b) ¿Con la definición que tiene la Corte Suprema del tipo de trata de personas se protege a la víctima de este tipo penal y por ende no se atenta contra los derechos humanos?
- c) ¿Los jueces resuelven los casos de trata de personas con observancia de a la normatividad convencional?

1.3. Justificación e importancia

La trata de personas es ante todo una violación de los Derechos Humanos que atenta contra la dignidad del ser humano. La “dignidad humana” es considerada como un fin en sí mismo, un valor incondicional, intrínseco e incomparable, que constituye a las personas como sujetos activos del principio de humanidad.

Al reconocer que la protección de la persona humana no debería ser de interés sólo del Estado dónde el individuo habita sino de toda la comunidad internacional, es que en diciembre del año 2000, la ONU adoptó instrumentos internacionales para luchar contra el crimen organizado internacional y acuerdos o protocolos adicionales para combatir la trata de personas, el tráfico de migrantes y las armas de fuego. Fueron un total de 117 países los que

firmaron el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños conocido como “Protocolo de Palermo”, lo cual fue complementado con la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y las Notas Interpretativas al Protocolo contra la Trata, siendo la finalidad principal que los países tengan una sola respuesta contra el crimen organizado que traspasa fronteras.

El Protocolo fue ratificado por el Estado Peruano en el año 2001, por lo que posteriormente en el año 2007, se dio la Ley N° 28950 con la finalidad de adecuar nuestra legislación al estándar internacional establecido en el Protocolo de Palermo, la cual derogó varios artículos del Código Penal y estableció la política del Estado para luchar contra la trata de personas. Pese a ello, en los últimos años la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de nuestro país ha emitido una serie de sentencias sobre delito de trata de personas, que han sido duramente cuestionadas respecto a lo resuelto en ellas, por la opinión pública nacional y la comunidad transnacional, y es que su tipificación, investigación, juzgamiento y sanción constituyen, además de deberes de la función interna, obligaciones internacionales que comprometen al Estado peruano al ser parte de las respectivas convenciones internacionales que regulan tales conductas.

El estudio propuesto está orientado a determinar si el tratamiento del delito de trata de personas por la Corte Suprema está siendo el adecuado para la persecución y sanción del mismo, de manera que se esté respetando los convenios internacionales a los que el Estado Peruano se encuentra suscrito, y que como Estado Constitucional vele por el cumplimiento de los derechos humanos.

Los resultados de la investigación darán luces respecto de la verdadera situación del tratamiento del delito de trata de personas analizando casos específicos; asimismo, se recomendará algunas medidas para su mejora.

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general

Determinar si el tratamiento que recibe el delito de trata de personas en la jurisprudencia de la Corte Suprema es el adecuado para la persecución y sanción del mismo, a raíz de la R.N. N° 2349-2014-Madre de Dios.

1.4.2. Objetivos específicos

- a) Establecer si la regulación del delito de trata de personas en la legislación Peruana es adecuada.
- b) Conocer si la definición que tiene la Corte Suprema del tipo de trata de personas protege a la víctima de este tipo penal y por ende no se atenta contra los derechos humanos.
- c) Analizar si los jueces resuelven los casos de trata de personas con observancia de a la normatividad convencional, a raíz de la R.N. N° 2349-2014-Madre de Dios.

1.5. Hipótesis

1.5.1. Hipótesis general

Un adecuado tratamiento del delito de trata de personas jurisprudencia de la Corte Suprema fomentaría la persecución y sanción del mismo.

1.5.2. Hipótesis específicas

- a) Una definición protectora de la Corte Suprema sobre la trata de personas protegerá a la víctima de este tipo penal y por ende se alineará con los Derechos humanos.

- b) Relacionando el concepto de delito de trata de personas que tiene la Corte Suprema con las definiciones dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se evitara la impunidad.

1.6. Como surge el problema

Este delito afecta a miles de personas alrededor del planeta puesto que son explotadas anualmente, motivo que explica porque la delincuencia puede tener ganancias dinerarias importantes, convirtiéndose en el tercer delito más difundido del planeta después del narcotráfico y la venta ilegal de armas.

Frente a esto en diciembre del año 2000, la ONU adoptó instrumentos internacionales para luchar contra el crimen organizado internacional y acuerdos o protocolos adicionales para combatir la trata de personas, el tráfico de migrantes y las armas de fuego, 117 países fueron los que firmaron el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños conocido como “Protocolo de Palermo”, lo cual fue complementado con la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y las Notas Interpretativas al Protocolo contra la Trata.

El Protocolo fue ratificado por el Estado Peruano en el año 2001, por lo que posteriormente en el año 2007, se dio la Ley N° 28950 Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y su Reglamento, que modificó varios artículos del Código Penal y estableció la política del Estado para luchar contra este flagelo, con la finalidad de adecuar nuestra legislación al estándar internacional establecido en el Protocolo de Palermo.

1.6.1. Descripción de la investigación

Nuestro país también se encuentra infectado por las redes de la trata, siendo considerado como lugar de origen, tránsito y destino de la trata de

mujeres internacionales, con predominio de la trata interna; se devela esto como una problemática de carácter nacional.

En los últimos años la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de nuestro país ha emitido una serie de sentencias sobre delito de trata de personas, que han sido duramente cuestionadas respecto a lo resuelto en ellas, por la opinión pública nacional y la comunidad transnacional, y es que su tipificación, investigación, juzgamiento y sanción constituyen, además de deberes de la función interna, obligaciones internacionales que comprometen al Estado peruano al ser parte de las respectivas convenciones internacionales que regulan tales conductas.

El estudio propuesto está orientado a determinar si el tratamiento del delito de trata de personas por la Corte Suprema está siendo el adecuado para la persecución y sanción del mismo, de manera que se esté respetando los convenios internacionales a los que el Estado Peruano se encuentra suscrito, y que como Estado Constitucional vele por el cumplimiento de los derechos humanos.

1.6.2. Antecedentes de la investigación

El tráfico de mujeres es un fenómeno de antigua data, su origen está ligado a la época de la guerra y de la esclavitud. Pero siempre y hasta la actualidad persiguiendo una única finalidad, la cual es, la satisfacción sexual de los hombres.

Como antecedente de lo que hoy se conoce como Trata se encuentra coincidencia con lo que sucedía en la época de la colonia; a pesar de haber pasado doscientos años se siguen utilizando a miles de mujeres con los mismos propósitos como son la satisfacción sexual y el trabajo esclavo. Con la Asamblea del año XIII de las Provincias Unidas del Río de La Plata se dictó la libertad de vientres, de modo que todo hijo de los esclavos negros que habitaban nuestra incipiente patria sería libres a partir de ese momento

el tráfico y la prostitución en América Latina se remontan a la época de la conquista cuando los españoles, en cumplimiento de la ley de guerra, tomaban o entregaban “el botín de mujeres” al vencedor, dando origen al comercio sexual y creando establecimientos para su ejercicio.

Posteriormente, en la colonia, aparecen las primeras normas por las cuales se castigaba dicha actividad, así como al proxenetismo, como con sanciones que podían llegar hasta la muerte.

Entre los Siglos XIX y XX producto de los conflictos bélicos, que trajeron aparejado hambre, enfermedades epidémicas y pobreza; se produce un masivo movimiento migratorio desde el continente europeo hacia el americano. Los nuevos habitantes trajeron con ellos sus costumbres, modos de vida, entre los cuales se hallan los antecedentes de las redes de la Trata de personas.

Según el investigador Gerardo Bra: “en el año 1879 llegaron a la Argentina los primeros inmigrantes judíos. Entre ellos se encontraba un grupo de polacos, y rusos que se dedicaron al negocio de la prostitución con mujeres, en su mayoría polacas, que traían engañadas de Europa del Este (Polonia, Rusia, Ucrania entre otros)”.

En esta época se comienza a utilizar la denominación “trata de blancas” (comercio de mujeres europeas y blancas), para diferenciarla de lo que se conocía trata de negros; esta última hacía referencia al comercio de personas traídas únicamente del continente africano. Pero en ambas con un único objetivo “lucrar con sus cuerpos”. Sin embargo, la denominación ya no es la misma, cambio de nombre a uno más abarcativo, hoy se llama Trata de Personas; ya que la explotación no solo es de mujeres también de hombres y niños que son buscados, elegidos, captados o secuestrados.

1.6.2.1. A nivel Nacional

A nivel nacional tenemos varios documentos de política aprobados pero eso no se ha plasmado en acciones concretas en los tres ejes de acción en la materia: a) prevención, b) persecución y sanción del delito y c) protección y reintegración de víctimas. Como menciona la congresista Indira Huilca, hay 4 normas nacionales para regular el tema: el marco general es el “Plan Nacional de Acción contra la trata de personas 2011-2016 – PNAT” (Decreto Supremo N° 004-2011-IN, publicado el 19 de octubre de 2011), pero también tenemos una norma MINJUS (“Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación”, Decreto Supremo N° 001-2015-JUS, publicado el 24 de enero de 2015), una norma del MININTER (“Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas”, Decreto Supremo N° 005-2016-IN, publicado el 12 de mayo de 2016) y una norma MIMP (“Protocolo Intrasectorial para la atención a víctimas de trata de personas en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP”, Resolución Ministerial N° 203-2014-MIMP de fecha 20 de junio de 2014).

1.6.2.2. A nivel Local

A nivel subnacional regional y municipal tanto provincial como distrital— hay una falta total de acciones efectivas a pesar de que se trata de los niveles de gobierno más cercanos a la población y con responsabilidades en el marco de la descentralización. De acuerdo con la información del IV Informe Alternativo: Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú de CHS Alternativo los avances son mayoritariamente normativos (Planes Regionales de Acción contra la Trata de Personas); aunque se da cuenta de algunos grupos de trabajo o redes regionales, no hay información de logros concretos alcanzados.

El tema de fondo es el presupuesto. De acuerdo con la publicación de 2017 de CHS Alternativo, para este año el presupuesto para la implementación del PNAT representa el 0.0025% del Presupuesto General de nuestro país; en 2016 fue el 0.0046%; en 2015 fue el 0.0108%; en 2014 fue el 0.0025% y en 2013 fue el 0.0015%

En su IV informe alternativo, CHS destaca que no es posible enfrentar la trata de personas si no se incluyen “estrategias para combatir la desigualdad, la pobreza multidimensional, la informalidad y la discriminación en todas sus formas; factores que tienden a incrementar exponencialmente la vulnerabilidad a la trata. En esa medida, un desarrollo humano, económico y social inclusivo, especialmente en las zonas con mayor presencia de trata de personas, será la mejor manera de prevenir este delito”

Regular ciertos sectores económicos es parte de la prevención. El informe del Consejo Nacional de Política Criminal sobre criminología de actores y perfiles penitenciarios señala una relación entre la trata de personas y sistemas económicos de trabajo informal. Principalmente en contexto de sistemas económicos extractivos y de servicios como los rubros de entretenimiento (bares, discotecas). La población sentenciada por el delito tiene un perfil claro: 8 de cada 10 internos por trata de personas tuvo empleos informales como antecedente laboral directo (p. 12), 44.9% de reclusos previamente trabajó en bares y discotecas y 24.49% en comercios u oficios independientes.

Requerimos un fuerte énfasis en el sistema educativo, tanto básico como superior, para evitar que las adolescentes y mujeres jóvenes estén expuestas a las distintas formas de trata y explotación. Y requerimos acción articulada con el nivel subnacional para controlar ciertos sectores económicos sensibles en temas de trata y explotación como bares, discotecas, hoteles, y zonas de explotación extractiva, especialmente la minería tanto formal como informal.

El informe del Consejo Nacional de Política Criminal sobre criminología de actores y perfiles penitenciarios muestra que “en algunos casos documentados, se configurarían tránsitos biográficos de condición de “víctima” a condición de “imputado” o “victimario”. El 59% de reclusas declara que fue víctima de violencia en algún momento de su vida [...]. De aquel 59%: la mitad declara que fue víctima de trata o explotación sexual; 15% de violencia física y 9% de explotación laboral”. Es una hipótesis que “las mujeres ocupan posiciones (dentro de las redes de trata) que implica un riesgo más alto de captura y detección”

Hay altos índices de impunidad. De acuerdo al documento de CHS de 2017 menos de 3 de cada 100 procesados por trata reciben sentencias en el Poder Judicial (p. 38). Recibió mucha publicidad la sentencia de la Corte Suprema que absolvió a una mujer del delito de trata con fines de explotación laboral contra una adolescente con el argumento; la Sala presidida por el ex juez Villa Stein rechazó el pedido de nulidad de la sentencia de vista bajo el criterio que el trabajo de “dama de compañía” por más de doce horas al día “no implica por sí mismo explotación laboral”.

Necesitamos medidas policiales de inteligencia para desbaratar las mafias detrás de la trata y la explotación, y no solo capturar a quienes se ubican en los últimos eslabones de la organización criminal. Y necesitamos jurisprudencia adecuada protectora de las víctimas en los procesos judiciales por trata y explotación.

La respuesta para cautelar los derechos de las víctimas es deficiente. El informe “Protegidas o revictimizadas. Alerta nacional sobre el modelo de gestión en los CAR de víctimas adolescentes de trata de personas” (2016) detalla testimonios de privación de libertad en condiciones vulneratorias de derechos en los Centros de Atención Residencial de Cusco y Madre de Dios.

El documento de CHS de 2017 coincide en señalar que las víctimas rescatadas no reciben una atención integral que incluya la satisfacción de sus necesidades primarias con alternativas de reintegración y generación de ingresos económicos, y que los albergues no cuentan con infraestructura adecuada ni con personal especializado para atenderlas. Necesitamos que haya medidas especiales para la restitución de las víctimas de trata y explotación como acceso a programas educativos (MINEDU), acceso a programas de empleabilidad y acceso a bolsas de trabajo (MTPE), apoyo para los emprendimientos económicos (PRODUCE), prestaciones integrales de salud física y mental (MINSA) y acceso a programas sociales (MIDIS).

De acuerdo al informe del Consejo Nacional de Política Criminal sobre criminología de actores y perfiles penitenciarios, la trata de personas depende de sistemas de explotación más grandes: “en ámbitos rurales y periurbanos, el fenómeno opera asociado a actividades extractivas como la tala o la minería ilegal; y en espacios urbanos, está asociado a los servicios de entretenimiento nocturno”. Por ello es posible y necesario focalizar acciones en ciertas zonas de nuestro país identificadas.

En zonas como La Pampa en Madre de Dios sobre el que se ha hecho varios reportajes periodísticos se evidencian las falencias múltiples del Estado. Por ejemplo, siguiendo los datos de supervisión que la congresista Indira Huilca reporta:

- ✓ Todo el conjunto está situado en una zona intangible ambiental y de derecho de vía pero el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no han emprendido el desalojo.
- ✓ El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) tiene control nulo de insumos para la explotación minera de la zona que tiene inclusive maquinarias instaladas.

- ✓ La SUNAT no controla efectivamente la entrada y salida de bienes producto de la minería informal.
- ✓ El Ministerio de Trabajo (MTPE) no ha hecho ninguna acción de fiscalización en la zona a pesar de que hay explotación laboral en los locales de la misma zona, no solo en la actividad minera.
- ✓ La Fiscalía especializada de trata tiene el apoyo de la Presidencia de la Junta de Fiscales de la zona pero 1 fiscal provincial y sus 3 adjuntos no se dan abasto y el Ministerio Público no tiene recursos para contratar más equipo.
- ✓ El Poder Judicial no contaba con un juzgado especializado en temas de trata y explotación a pesar de que hay una fiscalía especializada.
- ✓ El MINJUS no tiene un programa de litigio especial para delitos de trata y explotación; lo mismo para el MIMP; este último sector tiene un hogar de refugio en zona para víctimas de trata sobre el que el informe de Tierra de Hombres Suiza antes citado hace notar importantes deficiencias.
- ✓ El MININTER no tiene control efectivo de la zona que es “liberada” porque hay personal particular armado que defiende los intereses económicos de la zona a costa de la vida inclusive. Solo se han podido hacer operativos muy concretos pero nada que ataque la estructura organizada en esa zona.
- ✓ El Gobierno Regional y Local tienen nula presencia.
- ✓ Ejemplos como el de La Pampa en Madre de Dios hacen visible la necesidad de una intervención articulada entre los diferentes sectores del Poder Ejecutivo, del sistema de justicia en su conjunto y de los niveles de gobierno en zonas específicas. No solo se trata del MININTER o el MIMP, el tema implica por lo menos a dos de

los poderes del Estado (Ejecutivo y Judicial), a casi todo el Ejecutivo y no solo del nivel nacional sino también subnacional.

Hay un importante avance con el Decreto Legislativo 1323, de enero de 2017. Con esta norma, desde el 7 de enero de 2017:

- ✓ Tenemos un delito de explotación sexual que sanciona a quien “obliga a una persona a ejercer actos de connotación sexual con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole” con una pena de 10 a 15 años (artículo 153-B). En el Código Penal vigente hasta hoy solo se contemplaba como delito la explotación sexual comercial infantil y adolescente en ámbito del turismo (artículo 181-A).
- ✓ Tenemos un delito de esclavitud y otras formas de explotación que sanciona a quien “obliga a una persona a trabajar en condiciones de esclavitud o servidumbre, o la reduce o mantiene en dichas condiciones, con excepción de los supuestos del delito de explotación sexual” y a quien “comete el delito mediante engaño, manipulación u otro condicionamiento” con una pena de 10 a 15 años (artículo 153-C). En este delito y en el de explotación sexual se menciona expresamente que “el consentimiento brindado por el niño, niña o adolescente carece de efectos jurídicos”.
- ✓ Tenemos un delito de trabajo forzado que sanciona a quien “somete u obliga a otra persona, a través de cualquier medio o contra su voluntad, a realizar un trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o no” con una pena de 6 a 12 años (artículo 153-C).
- ✓ Hay un avance indudablemente pero aún se necesita regular de forma específica las diferentes expresiones de la explotación sexual (art. 153-B) con los tipos penales vigentes de promoción y favorecimiento a la prostitución (art. 179 del Código Penal), rufianismo (art. 180), proxenetismo (art. 181) y usuario-cliente (art.

179-A), precisando diferencias entre la situación de víctimas según sean niñas, niños y adolescentes o adultas.

1.7. Tipo y diseño de investigación y análisis

La investigación será de tipo básica, por cuanto tiene como propósito determinar si el tratamiento que recibe el delito de trata de personas en la jurisprudencia de la Corte Suprema es el adecuado para la persecución y sanción del mismo, a raíz de la R.N.Nº 2349-2014-Madre de Dios. Se contribuirá por tanto a la teoría, que servirá de referencia para próximos trabajos de investigación.

El diseño de investigación será no experimental de corte transversal, de nivel descriptivo explicativo; porque se iniciará describiendo el tratamiento del delito de trata de personas y posteriormente se convierte en correlacional porque tratará de medir la relación entre la variable tratamiento del delito de personas con la persecución y sanción del mismo.

1.7.1. Tipo de análisis

Para el estudio empírico se considera como unidad de análisis el distrito judicial de Lambayeque, con el fin de determinar si es adecuado el tratamiento que recibe el delito de trata de personas en la jurisprudencia de la Corte Suprema para la persecución y sanción del mismo a raíz de la sentencia R.N.Nº 2349-2014-Madre de Dios

1.8. Técnicas, instrumentos e informantes o fuentes

El presente estudio utilizó las siguientes técnicas e instrumentos de recojo de información.

1.8.1. Técnicas de recolección de datos

La técnica de documental.

Mediante esta técnica se recogió información de legislación, doctrina y jurisprudencia relacionada con la situación actual del delito de trata de personas, teniendo como instrumento el fichaje, obteniendo la información más relevante.

La técnica de la encuesta.

Esta técnica nos permite obtener información primaria de los jueces de los Colegiados Penales Permanentes de Chiclayo sobre si es adecuado el tratamiento que recibe el delito de trata de personas en la jurisprudencia de la Corte Suprema para la persecución y sanción del mismo a raíz de la sentencia R.N.Nº2349-2014-Madre de Dios, teniendo como instrumento el cuestionario elaborado especialmente para dicho trabajo de campo.

1.8.2. Instrumentos de recolección de datos

Fichaje

Mediante este instrumento se podrá obtener la información necesitada de manera ordenada, permitiendo que el investigador obtenga diferentes fuentes bibliográficas, así como conceptos importantes de las teorías relacionadas a la investigación.

Cuestionario

Es el instrumento contiene interrogantes relacionadas a las variables de la investigación, las cuales permitirán corroborar la hipótesis de la investigación.

1.9. Población y muestra

El presente estudio comprende una población compuesta por la Comunidad Jurídica (operadores de justicia), integrada por jueces de los Colegiados Penales Permanentes de Chiclayo.

1.10. Forma de tratamiento de los datos

Con la obtención de los datos recogidos con la técnica documental y la entrevista, se ordenarán dichas informaciones, que pasaran programas computarizados especializados, que representaran escalas numéricas y estadísticas en tabulaciones y cuadros.

1.11. Análisis estadísticos de los datos

La información obtenida con las técnicas de recolección de datos será procesada en los programas informáticos, dicha información arrojará valoraciones numéricas y estadísticas que serán analizadas por la investigadora mediante escalas o parámetros, relacionándola con la hipótesis, para obtener los resultados y conclusiones de la investigación

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes del problema

Entre los estudios que abordan el tema tratado en esta investigación se hallaron los siguientes:

El Protocolo sobre la Trata, define la “trata de personas”:

a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; ... (art. 3).

Por consiguiente, los tres elementos que deben darse para que exista una situación de trata de personas (adultas) son: i) acción (captación,...); ii) medios (amenaza,...); y iii) fines (explotación). El derecho internacional establece una definición distinta para la trata de niños (personas menores de 18 años), según la cual no es necesaria la existencia de un “medio”. Tan solo es necesario demostrar: i) la existencia de una “acción”, como serían la captación, la venta o la compra; y ii) que dicha acción tenía por finalidad específica la explotación. Dicho de otro modo, existirá trata cuando el niño haya sido sometido a algún acto, como la captación o el transporte, con el fin de someterlo a explotación.

Srikantiah (2007) Consideró que la trata constituye principalmente una vulneración del orden público y de la dignidad de las personas, debido a su

gravedad, debe ser sancionada por el derecho penal. Por esta razón, bajo esta perspectiva, inspirada principalmente en una teoría utilitarista, la causa del problema radica en los beneficios económicos que el delito reporta a los traficantes. En otras palabras, la trata es un delito sumamente lucrativo que implica bajos costos, especialmente punitivos, pues las sanciones tienden a ser bajas y la posibilidad de aprehensión es reducida, entre otras razones, por los bajos niveles de denuncia y la dificultad de identificar las redes y la comisión del delito¹.

Concluye que para poner fin a la trata, tipificar el delito, sus agravantes y formas de colaboración, endurecer las sanciones –especialmente las de orden monetario–, aumentar los esfuerzos de persecución de los traficantes y elevar los términos de prescripción del delito. El incremento de los costos asociados al delito y el endurecimiento de las leyes, para la visión criminal, genera un efecto disuasivo que previene el surgimiento de nuevas redes y contribuye a la desarticulación de las existentes.

Sin embargo, esta postura es criticada, entre otras razones, por instrumentalizar a la víctima y protegerla solamente de manera mediata, ya que el reconocimiento de sus derechos depende de la información que suministre al aparato jurisdiccional para cumplir su objetivo de dismantelar las redes. Además, el acceso de la víctima a los beneficios estatales.

Amiel, (2006) Planteó que la trata de personas es esencialmente un problema de violación de derechos humanos. Por ello, se resalta la necesidad de brindar protección y asistencia a las víctimas para evitar situaciones de revictimización y para que puedan superar lo vivido. Esto se logra mediante la reparación integral del daño causado, el restablecimiento total de los derechos y la reinserción a la sociedad, sin miedo al rechazo y a la estigmatización. Entender la trata de personas como un problema de derechos humanos ubica a las víctimas en el centro de la discusión. Según esta visión, el Estado es garante de los derechos humanos de las víctimas de trata de personas, razón por la

¹ Srikantiah, J. 2007. Perfect victims and real survivors: The iconic victim in domestic human trafficking law. Boston University Law Review 87: 157.

cual es deber de la comunidad internacional y de cada Estado en particular, crear normas que permitan prevenir el fenómeno, sancionar a los traficantes y, más importante aún, proteger a las víctimas. Además, para los defensores de derechos humanos, los derechos de las víctimas dependen del interés que la forma de trata a la que estuvo expuesta la víctima genere entre las autoridades policiales y penales.²

Jones (2009) Concluyó que los bienes jurídicos afectados, esta visión sostiene que la trata de personas es un problema de vulneración de un gran número de derechos humanos, en otras palabras, de violación de la dignidad, que demanda restablecimiento de manera prioritaria perspectiva consideran que la sola idea de traficar personas niega la calidad de seres humanos de las víctimas, el bien jurídico esencial y que con más fuerza debe protegerse en todo el mundo. Las causas a las que esta postura atribuye la trata son diversas. Por un lado, se halla la inestabilidad política y económica de los países de origen, cuyos conflictos internos hacen difícil la vida de la población, especialmente de grupos vulnerables como las mujeres y los niños. Finalmente, los defensores de la perspectiva de derechos humanos asocian la trata a la necesidad presente en los países de destino de encontrar personas que se hagan cargo de labores riesgosas y/o impopulares, tales como el trabajo minero, el servicio doméstico y la prostitución, cuya industria está en pleno crecimiento.³

Mattar (2000) Después de investigar, concluyó que la trata tiene origen en la inseguridad económica, social y política y representa, a su vez, una nueva amenaza para la seguridad humana, con unas dimensiones transnacionales, que trasciende las nociones tradicionales de seguridad las cuales se centran exclusivamente en las agresiones militares externas. Es por ello, que, para el representante de la teoría de la seguridad humana, la trata debe combatirse por medio de medidas que ataquen las causas de la inseguridad: la pobreza, la marginación, las desventajas sociales y culturales, especialmente las

² Amiel, Alexandra. 2006. Integrating a Human Rights Perspective into the European Approach to Combating the Trafficking of Women for Sexual Exploitation. Buffalo Human Rights Law Review 12: 5.

³ Jones, Angela A. 2009. Post Traumatic stress disorder and victims of human trafficking: A Perpetuation of chronic indignity. Intercultural Human Rights Law Review 1: 317-354.

desventajas que enfrentan las niñas y las mujeres, las desigualdades jurídicas –incluidos los obstáculos a la protección y reparación en los sistemas de justicia locales– y los riesgos de violencia e inestabilidad política. Estos factores incrementan el riesgo de ser víctima de la trata de personas porque, entre otras, hacen que las personas sean más vulnerables a las bandas criminales organizadas que mediante el engaño o la fuerza someten a las personas a toda clase de explotación.

En resumen, el objetivo de esta postura es atacar las causas de la trata y ofrecer una mejor asistencia y protección a las víctimas, así como implementar medidas de empoderamiento. De esta forma, la seguridad humana pone de relieve la necesidad de adoptar soluciones integrales, integradas y centradas en las personas que aboguen no solo por la seguridad física, sino por las libertades fundamentales, la seguridad económica y el bienestar social. Se busca que los gobiernos concentren sus energías en la prevención y no en la prohibición, siendo la prevención una obligación compartida de todos los gobiernos y que solo se puede lograr en cooperación activa con organizaciones de la sociedad civil y de la industria privada. Por lo tanto, si bien las soluciones involucran a la sociedad civil, requieren principalmente el compromiso de los Estados de fortalecer la cooperación entre ellos con el fin de prevenir y enfrentar de manera integral y con pleno respeto al Derecho Internacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la amenaza de la trata de personas.⁴

Cardozo (2010); considera que las víctimas de la trata son solamente las mujeres y niñas, quienes son sometidas principalmente a explotación sexual. Los hombres, de otro lado, no se reconocen como víctimas para no feminizarse y se presume que son los victimarios u opresores. Las mujeres en esta perspectiva no son concebidas como victimarias.

La principal respuesta institucional propuesta por las feministas radicales es la prohibición de la prostitución y otras actividades que promueven la violencia

⁴ Mattar, Mohamed Y. 2006. Human security or state of insecurity. *Intercultural Human Rights Law Review* 1: 249.

contra las mujeres como la pornografía, así como la criminalización de los proxenetas y de quienes demandan servicios sexuales. Además, para las feministas radicales no hay diferencia entre prostitución forzada y voluntaria, pues en realidad toda forma de prostitución es forzada por las inequidades sociales y económicas que enfrentan las mujeres. Por lo tanto, esta escuela no se preocupa por los medios empleados en la trata, pues los medios de explotación de las mujeres son siempre los mismos: fuerza y coerción.

Sin embargo, esta teoría es criticada por su énfasis en la explotación sexual. Algunas feministas liberales, por ejemplo, aseguran que el énfasis desproporcionado en lo sexual invisibiliza las similitudes que existen entre la explotación sexual y otras formas de trata. En todas las modalidades de trata, las víctimas enfrentan los mismos vejámenes, como el aislamiento, el abuso emocional y las amenazas. La división artificial entre modalidades de trata puede entonces limitar las respuestas institucionales y conducir a la impunidad de otras formas del fenómeno. En este sentido, algunos autores señalan que la división de modalidades de trata y el mayor reproche de la explotación sexual han llevado a que en muchos lugares, la trata para la explotación laboral, la servidumbre doméstica y otras categorías relacionadas con actividades típicamente laborales sean sancionadas con penas menores).⁵

Acharya (2009) Planteó estudiar a la trata de personas como un fenómeno transnacional y un negocio global realizado por el crimen organizado, que, si bien afecta a todos los países del mundo, conduce a un flujo de personas de los países menos desarrollados a los países industrializados,

Si bien esta teoría, no considera a la trata de personas como algo nuevo, ya que a lo largo de los siglos, mujeres y niños han sido explotados, afirma que la globalización y la integración regional han contribuido a su promoción y expansión. Los factores que han producido esta expansión son: la industrialización, pues afectó negativamente las sociedades agrarias en beneficio de las empresas transnacionales para quienes ha sido más fácil

⁵ Cardozo Lozano, Sandra M. 2010. Lectura teórica sobre la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas para combatir la trata de personas en Colombia.

obtener mano de obra barata; las grandes desigualdades, principalmente en educación y empleo, a las que se ven sometidas las mujeres en los países de origen; la liberación económica y la deuda externa de los países no industrializados; la inestabilidad política, la pobreza y el conflicto interno de los países de origen; las falsas expectativas de mejores condiciones de vida en otros países y la idealización del mundo; y los avances tecnológicos que amplían la posibilidad de los traficantes de fortalecer sus redes, contactar nuevas víctimas y descubrir nuevos sitios para realizar trata. Igualmente, esta perspectiva aboga por que se haga una distinción entre la trata de personas y tráfico ilegal de inmigrantes sin desconocer que la trata y la inmigración son asuntos distintos que pueden llegar a concurrir, debido a que las posibilidades de migración regular a los países industrializados se han reducido y los controles de entrada son más estrictos, por lo que los migrantes utilizan con frecuencia canales ilegales que más adelante pueden implicar algún tipo de explotación.⁶

Todres (2009) Concluyó que la trata tiene origen en la construcción devaluada y deshumanizada del otro, y la construcción del nosotros como virtuosos y como la representación de la norma con la que todos deben ser juzgados, particularmente en los países de destino. La devaluación del otro provee de racionalidad su tratamiento deshumanizado, mientras la humanidad del grupo dominante se presume. El abuso entonces es racionalizado como parte de la cultura del otro, y el uno es visto como altruista, como alguien que trata de ayudar a mujeres y niños cuya cultura les impone circunstancias difíciles. La construcción del otro –degradado– opera a través de múltiples dimensiones, como la raza, el género, la etnicidad, la clase, la casta, la cultura y la geografía. El resultado es la degradación de individuos, comunidades e incluso naciones y la construcción de privilegios para el grupo dominante.⁷

Fundación ESPERANZA (2005) La trata es igualmente un delito dinámico y complejo, en el cual se degrada a las personas a la condición de objetos,

⁶ Acharya, Arun, & Jarquín Sánchez, María E. 2005. Globalización y tráfico de mujeres: Una lección desde México. *Migración y Desarrollo* 42-53.

⁷ Todres, Jonathan. 2009. Law, otherness, and human trafficking. *Santa Clara Law Review* 49: 605.

privándoselas de su autonomía y menoscabando su libertad individual, se las negocia en cadenas mercantiles para satisfacer diferentes demandas, se las traslada dentro o fuera de un país con el fin de someterlas en el destino final a condiciones de explotación u otros fines ilícitos.⁸

Bases teóricas

Sub capítulo I: Antecedentes del Delito de Trata de Personas

1.1. Antecedentes históricos y enfoques de abordaje

La trata ha sido vista como una forma de esclavitud que ha existido siempre y ha evolucionado con el transcurso de los tiempos, hasta constituirse en un problema social visible a fines del siglo XIX e inicios del XX.

Hasta mediados del siglo XX se le denominó trata de blancas, haciendo referencia a la movilidad y comercio de mujeres blancas europeas para ser utilizadas como concubinas o prostitutas, pasando luego a llamarse trata de personas que junto con el tráfico de migrantes se constituyeron en las formas modernas de tráfico humano, pues se comercializan ya no sólo mujeres sino niñas, niños, adolescentes y hombres adultos de cualquier etnia o raza, hasta convertirse en un fenómeno mundial.

En noviembre del 2000, se define a la trata de personas a través de la diferenciación del tráfico ilícito de migrantes específicamente mediante el acuerdo internacional que los Estados firmantes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Complementarios contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes.

La complejidad de la trata aumenta con la diversidad de enfoques bajo los cuales se aborda. Para algunos es un negocio que produce réditos y como

⁸Fundación ESPERANZA. Metamorfosis de la Esclavitud. Manual jurídico sobre trata de personas, 2005.

tal se analiza desde un enfoque económico. Para otros es un delito que hay que perseguir y la víctima tiene solo la posibilidad de judicializar al perpetrador. Para otros la existencia de este delito y la necesidad de acabar con él es un argumento para establecer y cerrar fronteras. Para otros es producto de una moral social y personal cada vez menor, sin embargo, la trata de personas es una violación de los derechos humanos.

El enfoque securitista/ criminalístico por un lado está directamente relacionado con la migración, la preocupación de regularla para reducir el número de migrantes indocumentados/as y las leyes y políticas represivas que existen en algunos países para proteger sus fronteras, este enfoque no considera a las víctimas de trata como lo que son sino como inmigrantes irregulares que ejercen un trabajo sin autorización. Por otro lado, se concentra en los aspectos ilegales de los actos que constituyen el delito de la trata, se persigue a los perpetradores y en un segundo plano están las personas sujeto del delito, considerándoseles muchas veces cómplices y otras como la posibilidad de atrapar y judicializar al tratante, las víctimas no se asumen como sujetos de protección sino como medios para disminuir índices de inseguridad. Por ejemplo, en muchos países los programas para protección a víctimas sólo se hacen efectivos si las víctimas atestiguan contra el tratante. Este es un enfoque centrado en la soberanía de los Estados y no en los derechos humanos de las víctimas.

El enfoque moralista equipara a la trata con prostitución pues reduce los fines de la trata a uno solo y la relaciona directamente con la industria del sexo y con las mujeres como víctimas de este delito debido a su desvío de la línea moral trazada por la sociedad.

El enfoque económico/laboral se relaciona con el mercado, la demanda y la oferta y los problemas que surgen del desempleo, los cuales aumentan la vulnerabilidad ante la trata de personas, pues para este enfoque existen clientes o consumidores, personas que pueden ser consumibles y explotables e intermediarios entre unos y otras.

1.1.1. Antecedentes Normativos

1.1.1.1. Ámbito internacional

La internalización del derecho ha avanzado considerablemente en reconocer que la protección de persona humana no interesa sólo al Estado dónde el individuo habita sino a toda la comunidad internacional. Ello sin embargo, está referido a los derechos humanos, y para ello es necesario un adecuado concierto de voluntades expresadas en los tratados de derechos humanos por el cual se reconocen y establecen derechos así como los mecanismos de protección o de vigilancia.

Novak y Salmón, consideran que una de las características de los tratados de derechos humanos es su carácter no sinalagmático, esto es que a diferencia de los otros tratados, los Estados asumen obligaciones no en relación con otros Estados sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.

La más importante negociación jurídica a nivel internacional, es el tratado. Constituye un acuerdo de voluntades entre sujetos de la comunidad internacional, con el objeto de crear, modificar o extinguir una relación jurídica entre ellos.

Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional en este caso público, ya conste en un instrumento único o en dos o en más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación. La anterior definición no contempla los acuerdos entre estados que se rijan por el derecho interno, ni los convenios entre estados e individuos o sociedades privadas, ni cualquier acuerdo interestatal que no contempla algún tipo de relación jurídica. Es indispensable expresar que las normas internacionales en materia de trata de personas no solamente se encuentra regulada en tratados sino también en Directrices y/o Recomendaciones, que establecen las

pautas o mecanismos de acción que deben adoptar los Estados o instituciones.

En el caso de la trata de personas se advierte en su evolución histórica jurídica que uno de los primeros instrumentos normativos internacionales viene a ser el Acuerdo Internacional para la Represión de la Trata de Blancas del 18 de mayo de 1904, el mismo que se dio en un contexto social en la que se reportaba una importante incidencia de traslado de mujeres europeas hacia países árabes y orientales para propósitos inmorales como la prostitución. Es por ello que en aquellos años para que se entendiera como trata de blancas era necesario el cruce de fronteras nacionales y que el comportamiento típico este dirigido hacia actividades de prostitución o esclavitud sexual.

Posteriormente, el 4 de mayo de 1910 se firmó en París, la convención internacional Relativa a la Represión de la Trata de Blancas, en la cual si bien se sigue manteniendo el concepto de que la trata está referida a la movilización de mujeres para ser explotadas sexualmente, se agrega un criterio importante que es el considerar que el comportamiento criminal también se puede dar dentro del territorio nacional de los países.

Como complemento a las medidas internacionales suscritas hasta ese momento, se firmó también en Ginebra el 30 de setiembre de 1921 la Convención Internacional Para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños, la misma que fue publicada el 25 de enero de 1936. Dentro de los contenidos más importantes de este instrumento internacional podemos mencionar el compromiso de los Estados en la implementación de las medidas administrativas y legislativas con respecto a sus servicios de inmigración con la finalidad de combatir la trata de mujeres y niños. Se acuerda también poner en vigor reglamentos necesarios para la protección de mujeres menores que a viajen a bordes de buques para

migrantes, no sólo a la salida y a la llegada, sino durante la travesía, y a tomar las providencias a efecto de que se coloquen en lugares visibles, en las estaciones y en los puertos, avisos en que se prevenga a las mujeres y a los menores contra el peligro de la trata, y en los que se señalen los lugares donde pueden hallar alojamiento y ayuda.

El 11 de setiembre de 1933 en Ginebra, se firmó la Convención Internacional a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad.

Conforme a esta convención se indica que deberá ser castigado quienquiera, que, para satisfacer pasiones ajenas, haya conseguido, arrastrado o seducido, aún con su consentimiento, a una mujer o muchacha mayor de edad para ejercer la prostitución en otro país, aun cuando los actos que sean los elementos constitutivos del delito se hayan realizado en distintos países. Un punto importante de esta Convenciones que se sanciona los actos preparativos de la trata.

Siguiendo con esta evolución normativa internacional, el 2 de diciembre de 1949, en el marco de la Asamblea de la ONU se firmó la Convención para la supresión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. Esta convención, además de recomendar la sanción de actos de proxenetismo, contiene estipulaciones para asegurar la supervisión de los aeropuertos demás lugares públicos pertinentes, y para contar con la colaboración de los agentes de empleo y turismo, a fin de evitar que las personas que buscan empleo, especialmente las mujeres y niños, se vean expuestas al peligro de prostitución. Se propone abolir la prostitución al impedir que las mujeres se incorporen, aún sea en forma voluntaria, a la industria del sexo. No menciona la trata para otros propósitos, tales como el trabajo doméstico, matrimonio servil o el trabajo forzado. Asume una perspectiva de

control del crimen para la prostitución al catalogar como criminales todas las actividades que estén asociadas con ella, sin que se tenga en cuenta la edad de la mujer o su consentimiento.

Además de los instrumentos internacionales mencionados es necesario resaltar otros documentos que han permitido generar importantes avances en la protección de los Derechos Humanos como son: La Convención sobre la Esclavitud (1926), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las formas de discriminación a la mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del niño (1989), entre otros.

El tema de la trata de personas mantenía en aquella época un tácito entendimiento ideológico que es visible por el temor sostenido en sus definiciones, cuyo contenido enfatiza, limitándose a él, inconscientemente, el traslado de mujeres para actividades de explotación sexual, no considerándose como víctimas a varones ni como comportamientos fines a otros tipos de explotación.

Es recién con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional, conocida por el nombre de la ciudad en la que fue celebrada, Palermo (Italia) en diciembre del año 2000, en el que se logra elaborar una definición de la trata de personas en las que se incluye comportamientos de traslado, acogida, facilitación a través de medios de fuerza, coerción, engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad con un fin de explotación, pues comprende no sólo la explotación sexual, sino otras- como la explotación laboral, la mendicidad, el tráfico de órganos, entre otros-, pudiendo ser sujeto activo del delito cualquier persona, es decir, mujeres, varones y niños.

El Protocolo insta una definición globalmente aceptada de la trata de personas, que permite identificar sin más ambigüedad a sus víctimas.

Así mismo, a pesar de no ser un instrumento dirigido a promover la cooperación policial y judicial transfronteriza para luchar contra un delito, el protocolo tiene en cuenta una dimensión de derechos humanos, que, es imprescindible para una protección efectiva de las víctimas de la trata. De acuerdo con las disposiciones de este protocolo, no es necesario que las víctimas crucen la frontera de su país para ser consideradas como víctimas de la trata, ya que el elemento clave en el proceso de la trata es la explotación y no tanto su carácter transfronterizo.

Este Protocolo representa un nuevo enfoque del problema en varios aspectos:

- Se define que la “trata de personas” es un problema complejo y multifacético, en particular si se considera la participación de grupos delictivos organismos transnacionales.
- Además se conjugan las medidas tradicionales con procedimientos especiales de lucha contra la delincuencia organizada para investigar y sancionar a sus responsables con medidas para proteger a las personas objeto de trata.

Otro de los puntos contemplados es este importante instrumento está referido a la protección de las víctimas, conforme al artículo 6° del Protocolo materia de análisis se indica que cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada Estado parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, en particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata.

En cuanto a la repatriación, el protocolo señala que el Estado parte del que sea nacional permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado parte receptor una víctima de la trata, o en el que ésta tuviese derecho de residencia de esa persona teniendo debidamente en cuenta su seguridad. Este párrafo deberá ser entendido sin menos cabo alguno de los que disponga el derecho interno relativo al otorgamiento del derecho de residencia o a la duración de la misma. La parte importante en esta provisión es la frase “con la debida consideración para la seguridad de aquella persona”. Esto impone una obligación positiva a los gobiernos para asegurar que hay ningún peligro con las represalias u otro daño (como la detención por haber dejado el país o por ejercer la prostitución en el extranjero) situación que podría encontrar a la persona sujeto de la trata al retornar a su casa.

Consecuentemente, la trata de personas es abordada en varios instrumentos internacionales, entre ellos la Convención sobre la Esclavitud de 1926; la Convención Americana de Derechos Humanos; la Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena del año 1949; la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones análogas sobre la Esclavitud de 1956; la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979; la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y el Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía de 2000; la Convención Nacional de 1999, y el Protocolo Adicional contra el Tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente a las Mujeres y Niños

1.1.1.2. Ámbito Nacional

Los delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y su tipificación no es una situación muy reciente en nuestra legislación nacional, sin embargo, su entendimiento cultural, social, político y jurídico se ha ido desarrollando conforme a las recomendaciones conceptuales elaboradas en el marco de los estudios que constituyen la base sobre la que se elaboran los instrumentos internacionales.

El Perú suscribió la Convención de Palermo el 14 de diciembre del año 2000 y, mediante Resolución Legislativa N° 27527 del 4 de octubre del año 2001, aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos Protocolos. Dicho acto obliga a nuestro país, en virtud del artículo 5° del tan referido instrumento internacional, a modificar su legislación interna y adecuarla a la definición otorgada por el Protocolo de Palermo.

Mediante ley N°28251 de junio del 2004, se modificó el artículo 182° (Título IV “Delitos contra la Libertad”, capítulo X “Proxenetismo”) del código penal referente al delito de trata de personas, dicho artículo prescribe: “El que promueve o facilita la captación para la salida o entrada del país o el traslado dentro del territorio de la República de una persona para que ejerza la prostitución, someterla a esclavitud sexual, pornografía y otras formas de explotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años...”

Se infiere que el bien jurídico protegido por el delito de trata de personas es la moral sexual social (Luis Bramont-Arias Torres), la referida moral está en contra de todo tráfico de personas que tengan por objeto destinarlas a la prostitución u otras formas de explotación sexual. No obstante tampoco puede negarse que se protege la libertad sexual individual.

El sujeto activo puede ser cualquier persona, en la realidad son varias los agentes que actúan organizadamente. Cumpliendo una serie de labores como de reclutamiento, de la documentación legal acompañamiento a la víctima, entre otras acciones propias de las organizaciones criminales. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona varón o mujer. Con relación a la tipicidad subjetiva es necesaria la existencia del dolo. Quiere decir que dicha acción se realiza con conciencia y voluntad. En este caso la tentativa es admitida.

Las modalidades de trata de personas que se presentan en nuestro país son los más diversos, que van desde las promesas de trabajo, estudios, intercambio cultural hasta el modelaje y cibernovios. Los países de destino son principalmente Italia, Inglaterra, Japón, Francia, Estados Unidos, etc., siendo los países de tránsito Ecuador, Venezuela, y otros.

Con la finalidad de adecuar nuestra legislación al protocolo de Palermo, el 16 de Enero del año 2007, se publicó en El Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 28950 – Ley Contra La Trata De Personas Y Tráfico Ilícito De Migrantes, la cual establece un nuevo marco legal que permite ahora si judicializar y atender integralmente este flagelo, que no solo se relaciona con la explotación sexual, sino también con el tráfico ilícito de migrantes, la explotación laboral, el tráfico de órganos o tejidos humanos, la mendicidad y otras formas de explotación. Son ocho artículos y seis disposiciones complementarias, transitorias y finales, publicadas En El Diario Oficial “El Peruano”, que recogieron la propuesta del grupo de trabajo multisectorial contra la trata de personas que fue presidido en su oportunidad por El Ministerio Del Interior.

La nueva ley realiza modificaciones en el Código Penal, Código Procesal Penal, y la Ley Penal Contra El Lavado De Activos, entre

otras normas. En lo que concierne al contenido de la Ley N °28950, tenemos:

El primer artículo se refiere al tipo base de la trata de personas y amplia, además de la modalidad sexual, las de explotación laboral, tráfico de órganos o tejidos humanos, mendicidad y además. Recoge un tratamiento especial cuando la víctima de trata es niño, niña o adolescente. Art, 153.- Trata De Personas: “El que promueve favorece financia o facilita la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención del otro, en el territorio de la Republica o para su salida o entrada del país, recurriendo a la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de la libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación, venta de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud sexual o practicas análogas a la esclavitud u otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados a la servidumbre, la esclavitud o practicas análogas a la esclavitud u otras formas de explotación laboral o extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 años ni mayor de quince años, la capacitación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o adolescente, con fines de explotación se considera trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios señalados en el párrafo anterior.

Modifica, el Art. 303° “A” del Código Penal, referido al delito de tráfico ilícito de migrantes, con esta modificatoria se incluye a la persona que financia el tráfico y se adicionan como agravantes: la lesión grave o muerte del migrante, la pluralidad de víctimas y si la víctima es menor de 18 años o padece de algún tipo de discapacidad entre otros.

Modifica el texto del artículo 6° de la Ley N° 27765, Ley Penal Contra el lavado de Activos, se incluye como origen ilícito del lavado de activos, las conductas punibles de trata de personas y tráfico de migrantes.

Establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada. Se incluye la trata de personas en este tipo de beneficios que permita desarticular las redes criminales dedicadas a estos delitos.

Agente encubierto: Se modifican los numerales 1), 2) y 4) del Art. 341 del Código Procesal Penal promulgado por el Decreto Legislativo N° 957. Se otorgan facultades al fiscal para disponer la utilización de un agente especial, en este caso un ciudadano que va pro su rol o situación se encuentra inmerso dentro de una organización criminal operando para obtener evidencias incriminatorias del delito.

Otorgan facultades al fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional.

Regulación de los beneficios penitenciarios. Se aplica un mayor nivel de exigencia para la obtención de beneficios penitenciarios: redención de la pena por trabajo y educación liberación condicional y semi-libertad. En la forma agravada no hay beneficio penitenciario.

Coordinación con otros Estados, organismos internacionales, organismos no gubernamentales y sociedad civil para otorgar medidas de asistencia y protección a víctimas, colaboradores, testigos y peritos de trata de personas y sus familiares directos dependientes.

Promueve la suscripción, aprobación y/o adhesión, ejecución de acuerdos bilaterales o multilaterales con la finalidad de facilitar la

repatriación de connacionales víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; así como la extradición de los agentes de dichos delitos, dando importancia a su seguridad.

Finalmente en su tercera disposición complementaria, la Ley N°28950 dispone que el estado directamente o en coordinación con otros Estados, organismos internacionales, organismos no gubernamentales y sociedad civil, promoverá y ejecutará medidas de prevención de los delitos de trata de personas y tráfico de migrante, así como sus factores de riesgo, sea considerando entre otras: investigación, capacitación, información y difusión. Estas medidas de prevención deberán considerar el enfoque de derechos humanos y de grupos vulnerables, así como el interés superior del niño.

La ley prohíbe y criminaliza toda forma de trata de personas e impone sanciones más duras contra los tratantes, al mismo tiempo que autoriza operativos policiales encubiertos y secretos y ofrece una mayor protección a las víctimas y a los testigos. Esta ley impone penas de 8 a 15 años de prisión para delincuentes condenados por la trata de personas, así como penas mayores que van de los 20 a los 25 años de prisión en aquellos casos en los que existan circunstancias agravantes. Tales penas son bastante duras y comparables con penas impuestas para otros delitos graves.

Sup capítulo II: El delito de trata de personas en el contexto contemporáneo

2.1. Etapas de la trata de personas

Para complementar la definición es necesario comprender que la trata de personas es un delito que se da por etapas que pueden ser sucesivas o superponerse unas a las otras. Estas etapas son el reclutamiento o

captación, el traslado, el sometimiento o recepción y la explotación con sus diversos fines.

2.1.1. Reclutamiento (captación)

Los métodos de reclutamiento que los tratantes utilizan para “captar” a una víctima, parten de una oferta cuidadosamente diseñada para ganarse la confianza de la víctima y/o de sus familias, de modo que les impide evaluar, de manera objetiva, el riesgo al que se exponen, y captar de este modo el mayor número de víctimas.

En esta etapa, el tratante utiliza entre otros medios, la amenaza, el rapto, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, el engaño, el enamoramiento, la seducción o la persuasión; medios utilizados a menudo en forma combinada.

Cuando los tratantes no son parte del círculo cercano de las posibles víctimas de trata de personas, las formas de contacto se suelen dar a través de avisos en medios de comunicación, Internet o, por invitación directa de conocidos, amigos o familiares, para trabajar y ganar dinero en poco tiempo o, para estudiar, o establecer relaciones afectivas, en un lugar diferente al contexto donde se desenvuelve la potencial víctima, el tratante en este caso busca que la persona tome una decisión basada en la ilusión y las expectativa por los beneficios que obtendrá. En otros casos, el efecto de seducción se da despertando el deseo de alcanzar el éxito que otros y otras han logrado mediante "oportunidades" laborales o afectivas. Los tratantes también utilizan la estrategia de amenaza e intimidación presionando a la persona o a su familia para que acepte la oferta.

En ocasiones, hacen uso de una situación de vulnerabilidad y abusan de su poder aprovechando que la persona les presta sus servicios o

les adeuda una cantidad económica o vive y trabaja en sus propiedades y terrenos.

En los casos en los que los tratantes son parte del círculo cercano de las víctimas de trata de personas, tales como familiares, enamorados o amigos, suelen utilizar los vínculos sanguíneos y/o “afectivos” que les une a las personas para hacerlas víctimas de la trata.

El rapto o plagio es usado en algunos casos para captar niñas, niños y adolescentes.

2.1.2. Traslado

El proceso de la trata, continua con esta etapa en donde se realizan los trámites necesarios para la movilización de la víctima hacia el lugar de destino. Este traslado puede darse internamente de un lugar o ciudad a otra, por vía terrestre, aérea o marítima. Cuando traslado se da dentro del territorio nacional, se constituye la modalidad de trata interna, la que puede darse en diferentes regiones de un mismo país, de la zona urbana a la rural o viceversa; entre provincias, cantones y parroquias; o incluso dentro de una parte a otra de la ciudad, lo que ocasiona pérdida de lazos y redes de apoyo y, por tanto, una situación propicia para la explotación. La trata interna se da con mayor frecuencia con niñas, niños y adolescente.

Si el traslado se realiza hacia otro país, se constituye la modalidad de trata internacional. Se presenta cuando el reclutamiento, la movilización y la explotación se dan a través de varios países y en la movilización se cruza al menos una frontera internacional. Los preparativos pueden incluir el trámite de pasaportes, visas, cartas de invitación, suministro de dinero para el sostenimiento, reservas en hoteles, entre otros, y en algunos casos las personas contraen una

deuda con los tratantes, convirtiéndose en un elemento adicional de sometimiento.

De acuerdo con este traslado se puede hablar igualmente de lugares de origen, tránsito y destino. Estos lugares se asocian con el proceso mismo y donde la trata se expresa de diversas formas, especialmente si estos lugares están en zonas limítrofes o fronterizas entre lo urbano y lo rural, un país y otro, etc.

2.1.3. Explotación

En esta etapa, se crea una situación de desarraigo, al estar separadas de su entorno, su familia y sus amigos, las víctimas son llevadas al lugar previsto por los tratantes para su alojamiento que, a menudo, suele ser el mismo donde son sometidas a la explotación o servidumbre. Sus documentos son retenidos, se les violenta física y/o psicológicamente, se les manipula afectivamente y en muchas ocasiones se les genera adicciones a sustancias psico-activas. En este lugar las víctimas comienzan a experimentar la pérdida de control sobre su vida, la pérdida de la capacidad para protegerse o defenderse, experimentan su realidad y hacen conciencia del engaño. Es el momento crítico para las víctimas.

Se crea una situación de desarraigo, al estar separadas de su entorno, su familia y sus amigos, las víctimas son llevadas al lugar previsto por los tratantes para su alojamiento que, a menudo, suele ser el mismo donde son sometidas a la explotación o servidumbre. Sus documentos son retenidos, se les violenta física y/o psicológicamente, se les manipula afectivamente y en muchas ocasiones se les genera adicciones a sustancias psico-activas. En este lugar las víctimas comienzan a experimentar la pérdida de control sobre su vida, la pérdida de la capacidad para protegerse o defenderse, experimentan

su realidad y hacen conciencia del engaño. Es el momento crítico para las víctimas.

Es la última etapa del delito (cuando no concluye con la muerte de la víctima) y en algunos casos el inicio de un nuevo circuito de trata pues, en condiciones de absoluta vulneración, las víctimas pueden después de un tiempo de ser utilizadas por el explotador, ser vendidas o canjeadas como cualquier mercancía para otro explotador, proceso a través del cual se benefician los tratantes-intermediarios y los explotadores-clientes más de una vez.

El beneficio puede ser económico o no, pero la persona siempre es considerada como un objeto de consumo independientemente del fin de la Es en esta etapa, donde se concretan las vulneraciones/violaciones más graves a los derechos humanos de las víctimas. Aquí se evidencia el propósito concreto y específico de utilizar a la persona como un objeto/mercancía para obtener un provecho de ella. Aquí es conveniente aclarar, que el tipo penal ecuatoriano, no exige la prueba de la explotación, puesto que basta que la conducta tenga esa finalidad para que se configure la adecuación típica del delito de trata. Sin pretender abarcar todos los fines de explotación, a continuación, se plantean los más conocidos, debiendo acudir en muchos casos a los instrumentos internacionales de derechos, previamente revisados, para su cabal comprensión.

2.2. Clases de trata de personas

2.2.1. Trata de personas con fines de explotación sexual

Las personas son utilizadas en prostitución, turismo sexual y pornografía. Se controla el desplazamiento, horario, tarifas, clientes y servicios que debe prestar la víctima, no se tiene acceso al dinero

producido y por supuesto no se respetan sus derechos sexuales y reproductivos. En los casos de pornografía infantil no sólo se vulnera a las niñas, niños y adolescentes que se utilizan en la producción de imágenes y/o videos pornográficos, sino que se afecta además el imaginario de niñez, adolescencia y su sano desarrollo sexual.

Es uno de los fines más visibles de la trata de personas y hay una tendencia a creer que es el único, lo cual obedece a que tanto el trabajo sexual como la prostitución forzada se ejercen en lugares públicos, donde hay contacto de las víctimas con clientes y dueños de clubes, y sobre los cuales las autoridades policiales realizan acciones de control.

2.2.2. Trata de personas con fines de explotación laboral

Las personas son obligadas a la realización de actividades productivas, en trabajos formales e informales, o sea, sin contrato, en condiciones de explotación, realizando trabajos peligrosos para la salud física o mental, en jornadas extensas, en condiciones deplorables, por un pago ínfimo o sin él, y sin acceso a la seguridad social y por ende, en muchos casos, al incumplimiento de sus derechos laborales.

2.2.3. Trata de personas con fines de mendicidad

En algunos casos se ubica a la mendicidad como una forma de explotación laboral en la que se explota generalmente a niñas, niños, mujeres con bebés y ancianos o ancianas, a fin de generar lástima y compasión. Las víctimas deben completar una suma de dinero específica que entregan al explotador en cada jornada, de lo contrario son castigadas.

2.2.4. Trata de personas con fines de servidumbre y prácticas análogas a la esclavitud

Estos fines de explotación comprenden la: a) “servidumbre por deudas” en la que la víctima se compromete a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad -ejemplo un niño o niña-, como garantía de una deuda, en la que no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios; b) cuando la víctima es obligada a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona sin libertad para cambiar su condición; c) la práctica en virtud de la cual un niño o un joven menor de dieciocho años es entregado por sus padres, o uno de ellos, o por su tutor, a otra persona, mediante remuneración o sin ella, con el propósito de que se explote la persona o el trabajo del niño o del joven.

2.2.5. Trata de personas con fines de comercialización de órganos, fluidos, tejidos y células.

Ocurre cuando la víctima es trasladada con el objetivo de extraerle sus órganos, fluidos, tejidos o células de manera forzada para destinarlos al comercio, ya sea para ser trasplantados o para realizar procesos de fertilización humana. Actualmente en muchas legislaciones internas está en discusión si este es o no un fin de la trata.

2.2.6. Trata de personas con explotación orientada a fines delictivos

Las víctimas son utilizadas por grupos criminales para realizar actividades delictivas como el robo, sicariato, lavado de dinero y/o el transporte de estupefacientes. Las principales víctimas suelen ser niñas, niños y adolescentes o personas de la tercera edad,

quienes, en última instancia son realmente las expuestas y ponen en peligro su libertad e integridad física.

2.2.7. Trata de personas con fines de matrimonio civil

Constituye el establecimiento forzado de una relación de pareja. Ocurre con mayor frecuencia cuando se realiza con un niño, niña o adolescente, o con una persona ajena al contexto cultural, para, en su calidad de cónyuge, ser utilizado/a, en servidumbre doméstica, explotación sexual por parte de terceros, y/o para procrear. De acuerdo a la UNODC, es posible contemplar los siguientes casos:

- ✓ Cuando una persona, sin que la asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie entregada a sus padres, a su tutor, a su familia o a cualquier otra persona o grupo de personas; o
- ✓ Cuando el cónyuge/conviviente, la familia o el clan del cónyuge/conviviente tienen el derecho de cederla a un tercero a título oneroso o de otra manera; o
- ✓ Cuando la mujer, que a la muerte de su marido/conviviente, puede ser transmitida por herencia a otra persona.

2.2.8. Trata de personas de reclutamiento para conflictos armados

Las víctimas son usadas para fortalecer los grupos armados irregulares siendo explotadas en labores de servidumbre, de espionaje, como escudos humanos, o en el combate mismo. Con frecuencia son también, explotadas sexualmente.

2.2.8.1. Tenencia ilegal

Se consideran trata todos los casos en que los niños y niñas son ubicados en familias sin pasar por el trámite del sistema regular de adopción. Así la familia receptora ofrezca un ambiente saludable para el niño o niña, pues la entrega se hace al margen de un contexto de protección que siga el principio de interés superior y el de prevalencia¹⁰. En la mayor parte de los casos, los niños y niñas son sustraídos de sus hogares, sus identidades suplantadas y entregados por una suma elevada de dinero. Esta situación se agrava cuando el niño o niña, es explotado por la “familia receptora” en actividades como la mendicidad, la servidumbre o en actividades sexuales.

Ahora respecto a la igualdad nos referimos que la trata puede confundirse igualmente con la inducción a la prostitución, corrupción de menores, la adopción irregular, falsificación de documentos en general, o el tráfico de estupefacientes.

Es posible que ocurran otros delitos que no atañen a la víctima sino al delincuente. Según el volumen y grado de complejidad de la operación de la trata, es posible que el criminal o la organización delictiva tengan que blanquear el producto del delito o acudir a la evasión fiscal para proteger el producto de sus actividades. También puede que haya vínculos entre las operaciones de trata y otros actos criminales como el contrabando de armas o de drogas.

Puede establecerse una tipología para discernir mejor la naturaleza de los delitos relacionados con el proceso de la trata. La comisión de delitos puede caracterizarse según la víctima (la persona en cuestión o el Estado) o según la etapa del proceso de trata. El número y el tipo de delitos a menudo dependen de la complejidad de las actividades de trata y también de las personas y/o los grupos delictivos involucrados. Los delitos conexos con la trata que además se confunden con la misma, son:

- Tráfico de migrantes (esta diferenciación ya ha sido clarificada)
- Secuestro simple
- Explotación laboral/Explotación sexual

La Explotación Sexual Comercial puede ser o no un fin de la trata de personas relacionado generalmente con niñas, niños y adolescentes y se divide en: utilización en prostitución, utilización en pornografía y utilización en actividades sexuales asociadas con el turismo, en el caso de adultas y adultos estaríamos hablando de prostitución forzada. Se diferencia de la trata porque la víctima no es desarraigada de su lugar de vivienda, se le explota en diferentes espacios pero retorna día a día a su hogar o puede ser explotada por su propia familia bajo el mismo techo. De igual manera sucede en la explotación laboral.

Es importante anotar que cuando se hace referencia a trabajadoras/es sexuales (que son siempre adultos/as) se puede presentar una doble explotación: sexual y laboral, pues se le exigen servicios que en otras condiciones no prestaría y el pago por estos servicios termina en un mayor porcentaje en manos del explotador.

No obstante, lo anterior, en caso de duda, y atendiendo al principio y deber de prevención, la persona debe ser atendida con el fin de determinar con certeza si se trata de una víctima del delito de trata de personas.

Sup capítulo III: Contexto Jurídico del Delitos de Trata de Personas en el Perú

3.1. El Delito de Trata de Personas en el Código Penal Peruano

La ubicación del delito de trata de personas dentro de los delitos contra la libertad personal es un acierto y un avance significativo, pues este

delito anteriormente se encontraba en el Código Penal dentro de los delitos de proxenetismo (exactamente en el artículo 182°), solamente estaba tipificado la trata con fines de explotación sexual, representando de ese modo un gran obstáculo para la penalización de otro tipo de conductas que comprende la trata de personas.

La razón de ubicar este delito dentro de los delitos contra la libertad personal radica precisamente en el quebrantamiento de la voluntad de acción de la víctima, siendo por lo tanto una restricción a la libertad personal del individuo.

Descripción Típica Del Artículo 153°

“El que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte, traslado, acogida , recepción o retención de otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país, recurriendo a: la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o pago de beneficios, con fines de explotación, venta de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud sexual u otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, o la servidumbre, la esclavitud o practicas análogas a la esclavitud u otras formas de explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años”.

La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o adolescente con fines de explotación se considera trata de personas, incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios señalados en el párrafo anterior”.⁹

⁹ CODIGO PENAL PERUANO. Art. N° 153.

3.1.1. Bien jurídico protegido

El bien jurídico tutelado por el tipo penal lo constituye la libertad personal ambulatoria. Es necesario aclarar que no se trata de proteger la libertad en el sentido de no dejarlo mover de un lugar a otro, sino en un sentido amplio de restringir la libertad de la víctima no dejándole desenvolverse como a bien tenga o mejor le parezca a sus padres o representantes legales en caso del incapaz¹⁰

Para Rodríguez Devesa (1990): “Todo delito implica necesariamente la lesión, o al menos la puesta en peligro de un bien jurídico protegido”.¹¹ La identificación del mismo, a la vez que sirve de punto de arranque, conforma un dato de incuestionable utilidad desde su semántica, en la medida que va servir de marco para el examen de la conducta incriminada. El juicio de adecuación conforma una operación necesaria para delimitar los contornos de hecho enjuiciado y resolver conforme a derecho.

El origen del concepto de “bien jurídico” está en la pretensión de elaborar un concepto de delito previo al que forme el legislador, que condicione sus decisiones, pretensión característica de una concepción liberal del Estado, que concibe este como un instrumento que el individuo crea para preservar “los bienes” que la colectividad en su conjunto crea de suma convivencia proteger. En otras palabras, el bien jurídico es la elevación a la categoría de “bien tutelado o protegido por el derecho”, mediante una sanción para cualquier conducta que lesione o amenace con lesionar este bien protegido, de esta reflexión se puede deducir que el bien jurídico, obtiene este carácter con la vigencia de una norma que lo contenga en su ámbito de protección, más si esta norma no existiera o caducara, éste no deja de existir, pero sí de tener el carácter de “jurídico”.

¹⁰ Salinas Siccha, R. Curso de Derecho Penal Peruano. Parte Especial Tomo II. Palestra Editores Lima.2000. pág. 166 y 167.

¹¹ Rodríguez Devesa, José María. Derecho Penal. Parte General. Madrid. ISBN 84-88030-79-7. Tomo I.

El bien jurídico nace de una necesidad de protección a ciertos y cambiantes bienes inmanentes a la persona como tales, esta protección es capitalizada por el legislador al recogerlas en el texto constitucional de la cual existirían bienes cuya protección será cumplida por otras ramas del derecho, es decir, que no todos los bienes jurídicos contenidos en la constitución tienen una protección penal, existen bienes jurídicos de tutela civil, laboral, administrativa, etc.

Con la promulgación de la Ley N°28950 se establece con claridad como bien jurídico protegido de la trata de personas o la libertad personal, entendida esta como la capacidad de elección del ser humano.

La libertad es un bien jurídico que el ordenamiento jurídico reconoce a los individuos con la finalidad de que satisfagan sus necesidades dentro de las relaciones sociales.¹²

Con la ley N°28950 se busca establecer un tipo penal, y es orientador que públicamente se haya tomado la decisión de abordar el tema de la trata de personas desde una perspectiva jurídica, buscando proteger como bien jurídico los derechos y garantías protegidos en nuestra constitución y en los tratados internacionales.

La libertad en su mayor expresión presenta tres sentidos bien marcados, en principio está la libertad física (que implica actuar sin obstáculos), la libertad civil (que es el ejercicio de ciertos derechos que le asisten por su condición de persona) y la libertad moral (que viene a ser la libertad interna de la voluntad). Si estas esferas de la libertad son vulneradas. El sentido de la vida no será la expresión de los reales deseos de la persona; por lo tanto, su actuación, no representará su voluntad, dañando de esta manera la esencia de la personalidad y así, su condición humana. Esta afectación recorta las

¹² Bustos Ramirez, Juan. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. 1869.

condiciones mínimas que todo ser humano requiere para su normal desenvolvimiento social, la protección de las relaciones de las personas y de éstas para con su medio social bajo el amparo del estado. Por ello, en la trata de personas, cuando se identifica, capta y traslada a las víctimas a través del engaño, amenaza o coacción, la norma sanciona la afectación en el sentimiento de tranquilidad y ataque a la libertad de la formación de la voluntad, impidiéndole al sujeto pasivo tomar una decisión, realizar una acción o distorsionando su voluntad.

Sin embargo, debemos enfatizar en los comportamientos fines de la trata de personas usualmente presentan confusiones respecto a su delimitación. Por ello se deben diferenciar los comportamientos típicos de la trata de las conductas posteriores, por ejemplo: en caso de la explotación sexual, el bien protegido será la libertad sexual o frente a la extracción de tejidos u órganos se protegerá la vida, el cuerpo y la salud.

Este enfoque se refuerza a través de las modalidades de los tratantes, quienes usualmente son los beneficiarios iniciales (captación y traslado de las víctimas con fines de explotación) y otros son los beneficiarios de las actividades que las víctimas realiza, también es cierto que el criminal puede desarrollar varias conductas sucesivas desde la captación, sometimiento y traslado hasta la explotación, en este caso estaríamos ante un concurso ideal de delitos.

Es preciso señalar que en el delito de trata de personas se protege la libertad en sí misma, toda vez que esta es violada por otros hechos que no lo atacan directamente, sino en cuanto un medio para alcanzar otros fines (explotación sexual, laboral, prostitución, trabajos forzados, mendicidad, servidumbre).

En la trata de personas EL CONSENTIMIENTO DE LA VICTIMA NO EXIME DE RESPONSABILIDAD A LOS TRATANTES puesto que éste no se encuentra violado por el fraude, la coacción, entre otros.

Cuando se limita o se priva de la libertad, la persona no puede hacer lo que quiere, está limitada, en su libertad de movimientos aunque no haya cadenas. La persona tiene una limitación: no se puede ir porque está sometida a diferentes medidas de prisión, como el aspecto económico, ya que todas ellas acarrearán deudas que las personas no tienen otra alternativa, que sobrevivir a estas injusticias.

La ley, así como el protocolo lo que busca no es proteger la moralidad pública y las buenas costumbres. Estos derechos están radicados en la persona humana y no en sensibilidades colectivas, es por eso que sólo se exige la sanción cuando se da la hipótesis delictiva del engaño, de fraude, del aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, etc., pero no castiga la protección en sí, sino solamente sanciona cuando se dan los comportamientos que permitan derivar víctimas hacia esta actividad, es decir, cuando se desarrollan en un marco en que se vulneran los derechos antes mencionados.

3.1.2. Tipo Objetivo

Sujeto Activo: El delito de trata de personas, a diferencia de los tipos comunes como el homicidio donde en su gran mayoría, sólo es una persona quien comete el hecho delictuoso, nos encontramos ante un delito complejo, esto en razón que en la práctica son varios los sujetos que tienen participación en este delito, los cuales suelen estar organizados. Es este sentido la finalidad del legislador es no dejar sin no dejar sin castigo a todos los que participen en el engranaje de este delito. Para la ley todos los sujetos que intervienen son considerados autores de este delito, claro está siempre que se demuestre la cognoscibilidad de su participación: de igual forma deberá considerarse su autoría al margen de su posible responsabilidad como miembro de una organización criminal.

Es requisito de este delito la pluralidad de sujetos, aunque el modelo legal considere como punible solo o quien induce o interviene para facilitar la partida: más para que exista el delito es indispensable que la persona inducida o ayudada realice determinada conducta. La conducta punible consiste, en la primera forma, en los actos de inducción, y por lo mismo tanto de determinación como de investigación de una persona a trasladarse al territorio de otro estado o a un lugar distinto del de su residencia habitual, con el fin de ejercer allí la prostitución, en la segunda forma, en cambio, la conducta punible consiste en actos de intromisión para facilitar la partida de la persona mencionada, es decir, en suministrar los medios, de dar instrucciones, etc.¹³

La Ley N° 28950 busca a través de la amplia gama de verbos descritos en el artículo 153° castigar en calidad de autores a todas aquellas personas o entidades que intencionalmente promuevan, favorezcan o faciliten con sus actos a continuar con la cadena de la trata de personas. Cabe señalar que deben estar excluidas las personas o entidades que involuntariamente se convierten en un enlace en la cadena de la trata de personas, tales como un taxista o el propietario de un hotel.

Sujeto Pasivo: Puede ser cualquier persona, desde aquellas que son captadas, transportadas, vendidas transferidas. El consentimiento que de pronto pudo haberse sonsacado en una primera instancia por algún mecanismo de engaño, etc. se encuentra anulado.

El objeto material de este delito es la persona que es inducida o ayudada, sin que importe su sexo o estado moral¹⁴.

Comportamiento típico: la modificación recogida por la Ley N° 28950 especifica claramente los comportamientos que integran el proceso, que está integrado por un conjunto de eslabones que se inicia con la

¹³ RANIERI, Silvio. Manual De Derecho Penal. Ob. Cit. Pág. 158.

¹⁴ RANIERI, Silvio. Ob. Cit. Pág. 158.

investigación, captación y aislamiento de la víctima, que puede llegar al extremo de privación de la libertad, con la finalidad de ser incorporados a la producción de bienes y servicios contra su voluntad. Podemos apreciar que la primera afectación se da en la esfera de la libertad personal y la segunda en el sometimiento de la víctima a un proceso de explotación.

El comportamiento que exige el tipo penal al agente es el de retener o trasladar de un lugar a otro a un menor de edad o una persona incapaz de valerse por sí misma empleando violencia, amenaza, engaño u otro acto fraudulento. Retener significa conservar, guardar, no dejar que se vaya a arrestar a la víctima. Trasladar significa mudar, desplazar a la víctima de un lugar a otro distinto y no querido. El medio que emplee el agente habrá de ser violento (violencia física), la amenaza con la acusación de un mal inminente, el fraude, el engaño o abuso de confianza. El consentimiento de la víctima es irrelevante tratándose de menor de edad¹⁵.

El tratante tiene control total sobre los movimientos de sus “empleados” y sus ingresos; las víctimas de trata muchas veces terminan en esta situación por deudas; una vez que se hallan en el lugar de destino se encuentran ansiosas de comenzar a ganar dinero para cubrir su deuda; sin embargo, los tratantes continuamente están encontrando nuevos gastos para cargárselos y la fecha de culminación de la deuda continúa postergándose.

3.1.3. Tipicidad Subjetiva

Se requiere necesariamente el dolo, es decir pleno conocimiento de lo que se está realizando.

¹⁵ Villa Stein. Derecho Penal Parte Especial. Editorial San Marcos. Lima, 1998, pág. 122.

El delito se perfecciona en el mismo momento en que el sujeto pasivo queda a disposición bajo las órdenes del sujeto activo. Ello significa que para perfeccionar el injusto penal, no se requiere que el agente consiga sus propósitos o fines propuestos con el secuestro de la víctima. Si por el contrario ello llega a suceder, estaremos ante un delito agotado. Siendo un delito de resultado no hay inconveniente en que el desarrollo de la conducta delictiva se quede en el grado de tentativa¹⁶.

3.1.3.1. Pena

La pena en el delito de trata de personas no distingue el grado de participación, todos serán sancionados con la pena de autor desde el sujeto que capta hasta el sujeto que retiene, aunque solamente realicen la acción definida por uno de los verbos rectores (ejemplo "transporte") o las realicen todos (captación, transporte, traslado, acogida y recepción). No puede darse el caso que la persona que realice la captación y también el traslado sea castigada dos veces, solamente se sanciona una vez. Quedará a criterio del juez en el supuesto que evalúe que una persona ha participado en toda la línea productiva probablemente aplique la pena que sea más alta dentro del rango penal establecido por la Ley, pero en teoría va ser sólo una sanción la que va recibir.

La Ley establece una penalidad entre 8 y 15 años, esto en razón que forma parte de las conductas delictivas propias de la criminalidad organizada, teniendo en cuenta el principio de "proporcionalidad", por el cual la pena debe darse en relación al daño causado.

¹⁶ Salinas Siccha, R. Curso de Derecho Penal Peruano. Parte Especial Tomo II. Palestra Editores Lima.2000. pág. 178.

Cabe resaltar que la ley ha dispuesto que en el caso de niños o adolescentes que sean captados, transportados, trasladados, con fines de explotación no se tendrá en cuenta los medios utilizados, esto es justificable a razón que por su condición, corta edad, están en un estado constante de vulnerabilidad y por lo tanto las convierte en potenciales víctimas de trata.

3.1.4. Tipo agravado de Trata de Personas

El tipo agravado, contenido en el artículo 153°- A¹⁷ del Código Penal, prevé las circunstancias que aumentan la responsabilidad penal del autor del delito de trata de personas- que en su modalidad básica viene regulado en el artículo 153°, debido a que implican un mayor grado de peligrosidad o perversidad. El artículo referido establece dos escalas de agravantes.

La primera escala establece- además de inhabilitación- una pena no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de la libertad e inhabilitación cuando:

1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública;
2. El agente es promotor, integrante o representante de una organización social, tutelar o empresarial, que aprovecha de esta condición y actividades para perpetrar este delito;
3. Exista pluralidad de víctimas;
4. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad o es incapaz;

¹⁷ Artículo introducido en el Código Penal por la Ley N° 26309, de 20 de mayo de 1994, y modificado por el artículo 1° de la Ley N° 28950, publicada el 16 de enero de 2007.

5. El agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente hasta el cuarto grado de afinidad, o tiene a la víctima a su cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo hogar.
6. El hecho es cometido por dos o más personas.

En la segunda escala, la pena será privativa de libertad no menor de 23 años, cuando:

1. Se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en inminente peligro de vida y la seguridad de la víctima.
2. La víctima es menor de catorce años de edad o padece, temporal o permanentemente, de alguna discapacidad física o mental.
3. El agente es parte de una organización criminal.

Según los agravantes especificados en las dos escalas, el delito de personas agrava sus penas cuando el autor del delito comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública (Ej. Policía que se aprovecha de su cargo para omitir detener a las personas que trasladan a las víctimas de trata cuando éstas no tienen documentos), cuando son varias las víctimas de trata, cuando alguna tiene entre 14 a 18 años, entre otros que señala el Art. 153-A CP, todos referidos a las características especiales del agente pasivo (víctima) como activo (tratante).

3.2. Diferenciación del delito de trata de personas con otros delitos

3.2.1. Con el delito de violación sexual

El Delito de trata de personas atenta contra la libertad personal. Es la capacidad de autodeterminación con la que cuenta una persona para desenvolver su proyecto de vida, bajo el amparo del Estado y un

ámbito territorial determinado; Por otra parte el delito de violación sexual, vulnera la libertad sexual que comprende también la capacidad de autodeterminación de la persona pero referida al ámbito específico de las relaciones sexuales. Constituye delito de propia mano, en el que se sanciona al que tiene de modo directo y personal el acceso carnal o acto análogo con la víctima.

3.2.2. Con el delito de proxenetismo

El Delito de trata de personas atenta contra la libertad personal. Agota su realización en actos de promoción, favorecimiento, financiación o facilitación del acopio, custodia, traslado, entrega o recepción de personas dentro del país o para su ingreso o salida de él, con la finalidad de que ejerzan la prostitución o sean sometidas a esclavitud o explotación sexual. Es un delito de tendencia interna trascendente donde el uso sexual del sujeto pasivo es una finalidad cuya realización está más allá de la conducta típica que debe desplegar el agente pero que debe acompañar el dolo con que éste actúa. El tratante actúa como proveedor.

En el delito de proxenetismo o favorecimiento a la prostitución se vulnera la moral sexual de la sociedad y la dignidad sexual de aquella persona que es prostituida o explotada sexualmente, y a la que se predetermina y somete a sostener prácticas sexuales con terceros a cambio de dinero. Se sanciona al que favorece la prostitución de otro, o al que de manera fraudulenta o violenta entrega físicamente a la víctima a otro para el acceso carnal. En los casos de favorecimiento de la prostitución el sujeto activo actúa indirectamente, promoviendo (impulsa, inicia o influencia) o favoreciendo (creando condiciones), la prostitución de la víctima- corrupción sexual- fin lucrativo. El promotor actúa como impulsor o facilitador.

En el delito de proxenetismo el agente directamente interviene en el comercio sexual de la víctima a la cual, previamente convence o compromete para que se entregue sexualmente para que se entregue sexualmente por una contraprestación económica a terceros. El agente en este delito oferta y administra la prostitución de la víctima. El proxeneta actúa como expendedor y gestor de la prostitución de las víctimas.

El concurso real entre los delitos de trata de personas, favorecimiento a la prostitución y proxenetismo puede darse pues en la práctica quien se dedica a la trata también puede dedicarse de modo sucesivo o paralelo a la promoción o explotación directa de la persona a quien captó, trasladó o retuvo inicialmente con la finalidad de entregarla a terceros promotores de la prostitución o proxenetas (Art. 50 del CP).

3.2.3. Con el delito de tráfico ilícito de migrantes

Según la UNODC¹⁸, existen tres diferencias saltantes:

- **El Consentimiento:** Las víctimas de la trata nunca han consentido o si lo hicieron inicialmente, ese consentimiento ha perdido todo su valor por la coacción, el engaño o el abuso de los traficantes. En el delito de tráfico de migrantes que suele realizarse en condiciones peligrosas o degradantes, los migrantes consienten en ese tráfico.
- **Explotación:** En el delito de trata implica la explotación persistente de las víctimas de alguna manera para generar ganancias ilegales para los traficantes. Resultan ser más gravemente afectadas frente a una nueva victimización y otras formas de abuso frente a los migrantes clandestinos. En cambio

¹⁸ Definiciones tomadas de la página: www.unodc.org/unodc/en/trafficking_human_beings.html.

en el delito de tráfico ilícito de inmigrantes la explotación termina con la llegada de inmigrantes a su destino.

- **Transnacionalidad:** El delito de trata puede no ser transnacional, pues pueden desplazar a las víctimas dentro del mismo Estado. Mientras que el delito de tráfico ilícito de inmigrantes es siempre transnacional.

3.3. Respecto a la R. N. N°2349-2014 Madre de Dios.

Otra vez la prensa cuestiona lo hecho por la Sala Penal Permanente (en adelante SPP), comúnmente llamada la «Sala de Villa Stein», sobre la sentencia que absuelve a la propietaria de un bar por el delito de trata de personas. Los hechos que quedaron probados fueron:

1.- La menor tenía 14 años. 2.- Trabajaba un aproximado de doce horas, en un bar bebiendo y acompañando a los clientes. 3.- La propietaria le dijo que si quería haga «pases»; en buen cristiano, le decía que si quería ejerza la prostitución (se probó que fue en una única oportunidad). 4.- Los hechos se cometieron en Madre de Dios, en el centro minero de Mazuko, Tambopata.

Leyendo la sentencia, se aprecia la poca motivación de la misma. Se debió motivar mejor el fallo absolutorio.

La SPP apela al criterio de legalidad exigido en el artículo 153 del CP, esto es, para demostrar la comisión del delito de trata de personas se debe probar en grado de certeza la explotación laboral. La SPP arriba a la conclusión que el fin no fue que la menor trabaje comercializando su cuerpo, sino como dama de compañía. Aunque como lo he señalado, el asunto es que la Fiscalía debió demostrar que la captación fue para explotar físicamente a la agraviada (muy al margen si fue para fines sexuales).

El problema es la forma cómo lo dice la Sala. Los términos usados por la SPP no fueron los más felices, pues el simple hecho de señalar que trabajar acompañando a los clientes por doce horas no forma parte del núcleo central «explotación», pues el desgaste físico no se mide por las horas trabajadas, sino por el agotamiento físico. Es un deficiente motivación a mi juicio.

Aquí quiero detenerme un momento. Definitivamente existen tratados firmados por el Perú, donde la protección del menor por parte del Estado debe ser prioridad. Incluso por el principio del interés superior del menor, las normas se flexibilizan. Ahí tenemos, por ejemplo, los procesos por alimentos, donde el tema probatorio queda flexibilizado en aras del interés superior del niño.

Eso por un lado. Tema distinto es si para el derecho penal, que es fuente de sanciones y no de derechos, esa obligación del Estado debe flexibilizar los criterios probatorios para condenar a quienes se le imputan delitos contra menores de edad. En mi opinión no.

En materia penal, por lo menos, nuestra legislación exige que cuando un/una menor (entre 14-18 años) presta su consentimiento para relacionarse con un mayor de edad, no es constitutivo de delito. Para el derecho civil, también. Estos pueden contraer matrimonio sin cumplir la mayoría de edad. En tal sentido, la voluntad de una persona mayor de 14 años es gravitante para darles rostro a las figuras jurídicas. En el delito de trata de personas el consentimiento es irrelevante cuando el agente empleó violencia o grave amenaza. Que no es el caso.

Incluso el Acuerdo Plenario 3-2011, hace una diferencia entre proxenetismo, trata de personas y favorecimiento de la prostitución.

Si esto es así, entonces se debió ofrecer una mejor explicación, por qué una persona de 14 años, en las condiciones laborales de acompañar por doce horas a clientes (donde bebe licor) no forma parte de ese verbo rector «explotación». Sostener, sin ofrecer la menor explicación,

que eso no desgasta a una menor de edad, en mi opinión constituye una motivación defectuosa. Ahí el problema de la sentencia.

3.4. Marcos conceptuales o glosario

a) Amenaza

Consiste en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o su familia¹⁹.

b) Consentimiento

Manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la cual un sujeto se vincula con otros. La edad de consentimiento define el tiempo legal en el que una persona puede consentir voluntariamente a la actividad sexual con otra persona. Esta varía según el país.

c) Crimen organizado

Se define como las actividades delictivas de tres o más personas relacionadas por vínculos jerárquicos o personal, que permiten a sus dirigentes obtener beneficios, controlar territorios o mercados dentro o fuera del país, por medio de la violencia, intimidación o corrupción, al servicio de una actividad delictiva como trata de personas, tráfico ilícito de drogas o de armas, entre otros.

d) Engaño

Es el acto que hace creer a otro, sea con palabras o de cualquier otra forma, una cosa que no es verdad, induciéndolo a error.

e) Recepción

¹⁹Real Academia Española: Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición www.rae.es. Fecha de visita: 21 de junio de 2007.

La recepción se enfoca en el recibimiento de personas, en este caso las víctimas de trata de personas. El receptor las oculta en un escondite temporal en tanto se reanuda el viaje hacia el destino final o las recibe y mantiene en el lugar de explotación. En este caso, la normativa sanciona a quien recibe, pero también al propietario del local o la empresa o persona que arrienda el lugar sea este comercial o particular en tanto hayan permitido la estadía temporal o permanente de las víctimas con conocimiento del propósito para el que se les oculta o utiliza. Define una acción sancionable en la trata de personas.

f) Rapto

El rapto es una figura jurídica orientada a la sustracción y retención de una mujer con fines deshonestos o de matrimonio. Es una figura penal que se mantenido en las legislaciones a través de los siglos. En el Protocolo de Palermo, el término “rapto” tiene un sentido más amplio, ajustado con mayor certeza a un secuestro sin objeto de lucro. No obstante, en el mundo jurídico este concepto se refiere, exclusivamente, a la sustracción y retención de mujeres.

g) Esclavitud

Es el estado o condición de una persona sobre la cual otra ejerce dominio al considerarla su propiedad. En este contexto, la trata de esclavos comprende todo acto de captura, adquisición o cesión de un individuo para venderlo o cambiarlo; así como todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo; y, en general, cualquier acto de comercio o transporte de esclavos.

h) Explotación

Utilizar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, cualidades o sentimientos de una persona, un suceso o una circunstancia cualquiera²⁰.

i) Fraude

Engaño con el que se perjudica a otro para el beneficio propio²¹.

h) Mendicidad

Es una práctica, permanente o eventual, que consiste en solicitar de alguien con persistencia y humillación una dádiva o limosna. La mendicidad no implica transacción económica, prestación de servicios ni relación laboral alguna; quien brinda la limosna la otorga en donación a favor de quien la solicita²².

En diversas ciudades del Perú se sabe de sujetos que captan, roban y hasta alquilan a menores a cambio de sumas que pueden bordear los 25 soles, llegando incluso a doparlos y maltratarlos. “Los captan en los conos de Lima, Huancavelica y Puno. A veces son los mismos padres quienes los explotan”²³

i) Proxeneta

Es el mediador o intermediario para que se den relaciones sexuales remuneradas.

Según el Código Penal peruano, proxeneta es la persona que “compromete, seduce o sustrae a la víctima para entregarla a un tercero con el objeto de tener con ella acceso carnal”²⁴

²⁰Véase “explotar”. En: Real Academia Española: Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición www.rae.es. Fecha de visita: 21 de junio de 2007.

²¹<http://clave.librosvivos.net/>

²²Artículo 2.1 del Reglamento de la Ley 28190, que protege a los menores de edad de la mendicidad, aprobado por Decreto Supremo 001-2005-MIMDES, publicado el 19 de enero de 2005.

²³Citado en el diario El Comercio, 8 de febrero de 2007.

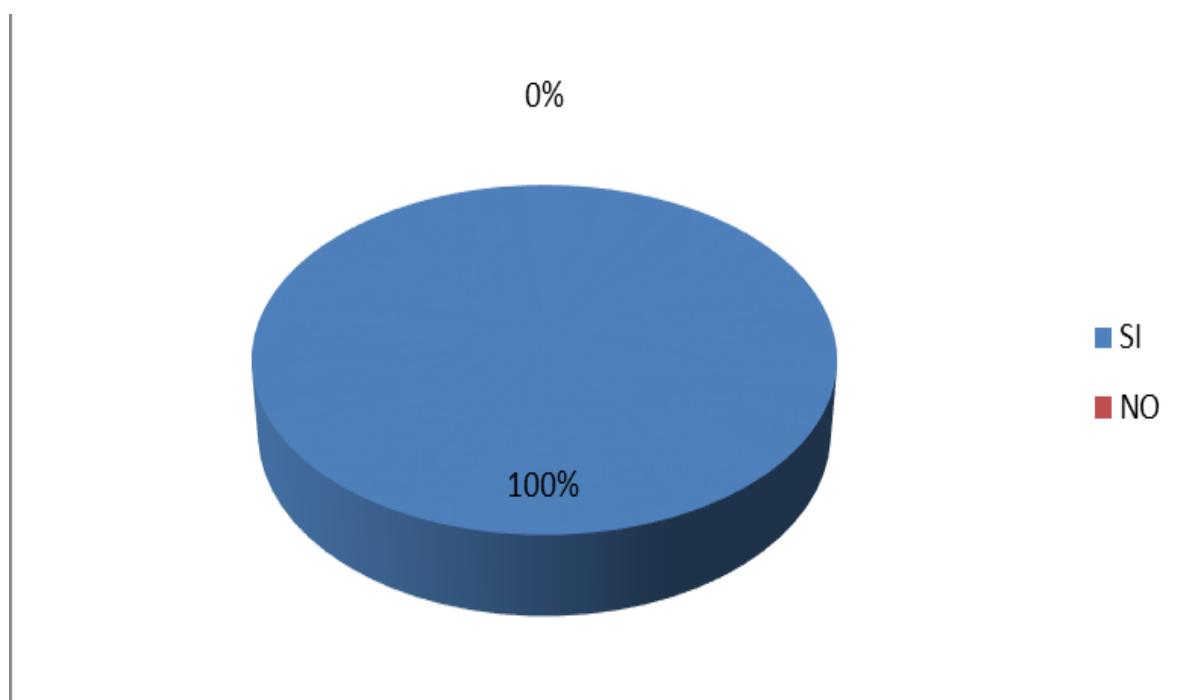
²⁴Código Penal, artículo 181.

CAPÍTULO III: ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Encuesta realizado a los jueces de los Colegiados Penales Permanentes de Chiclayo

Figura N° 1.

a) Considera Usted que el delito de trata de personas es una violación a los derechos humanos

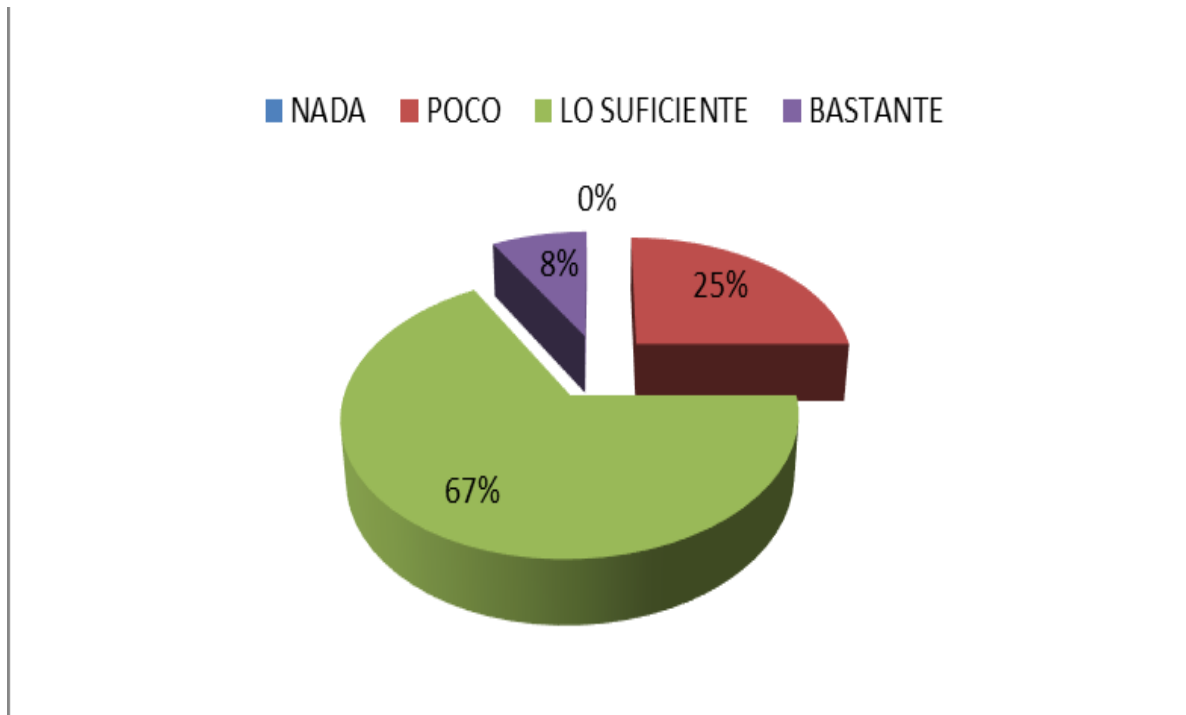


Elaboración Propia

Interpretación: Los resultados nos indican que el 100% de los encuestados afirman que el delito de trata de personas es un delito de violación a los derechos humanos.

Figura N° 2.

b) ¿Se debe tener en cuenta la jurisprudencia para resolver casos de delitos frente a la trata de personas?

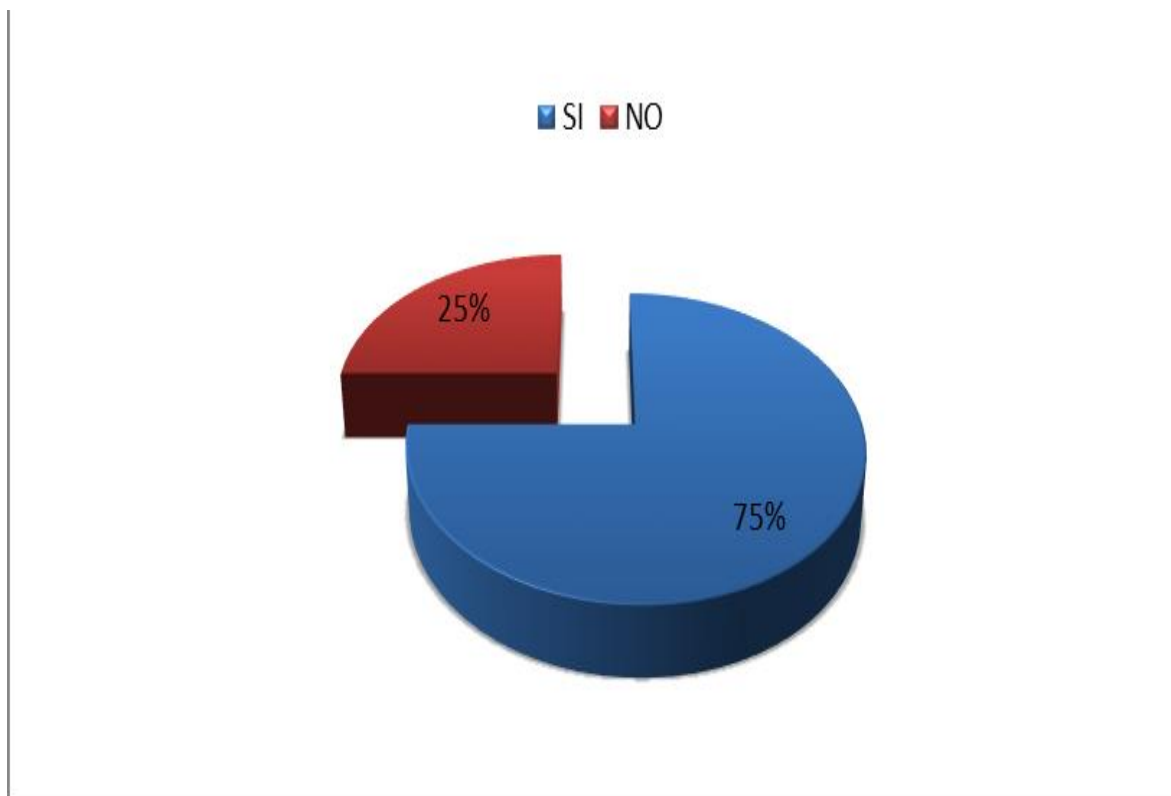


Elaboración Propia

Interpretación: Los resultados nos indican que el 67% de encuestados debe tenerse en cuenta la jurisprudencia para resolver delito de trata de personas, mientras el 25% está un poco de acuerdo y un 8% considera que si o si debe tomarse en cuenta.

Figura N°3.

c) ¿Considera errada el Recurso de Nulidad N° 2349-2014, de la Sala Penal Permanente donde señala que no concurre la finalidad de explotación sexual porque la propia agraviada había declarado que la procesada le sugirió tener sexo con clientes en una única oportunidad?

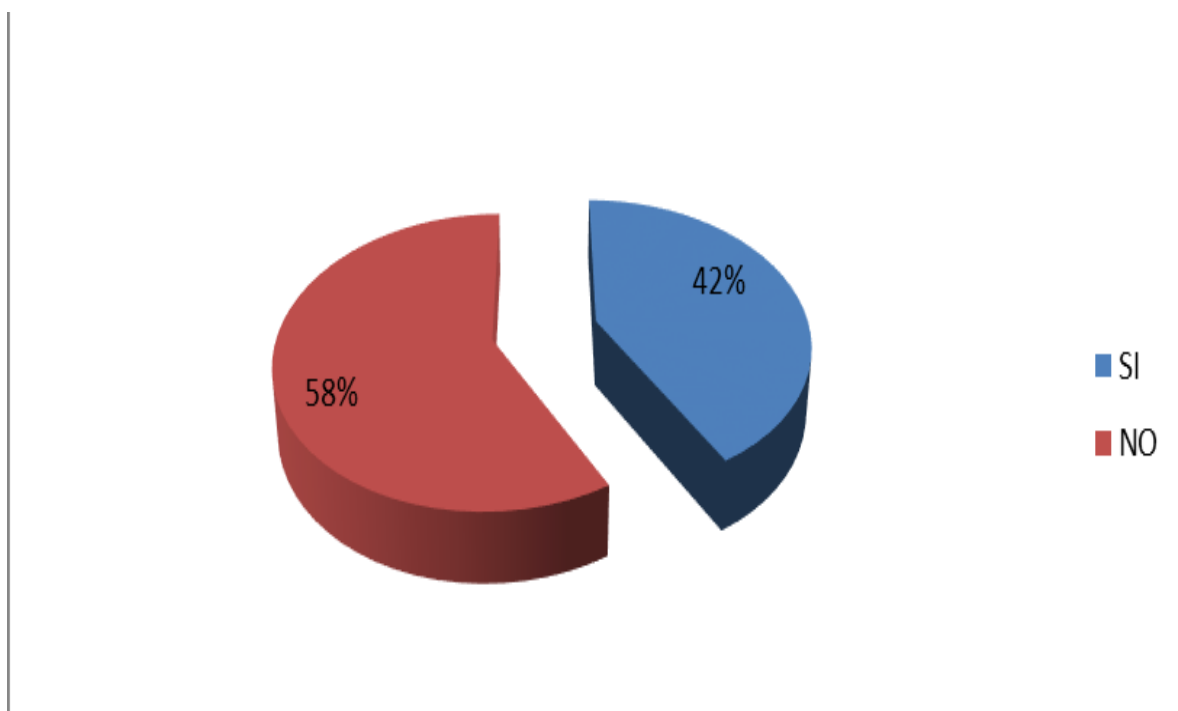


Elaboración Propia

Interpretación: Los resultados aquí encontrados, concuerdan con uno de los perfiles de nuestra limitación problemática, en tanto, corrobora que la jurisprudencia estudiada ha vulnerado derechos fundamentales, en ese sentido el 75% de magistrados consideran errada el Recurso de Nulidad N° 2349-2014, de la Sala Penal Permanente donde señala que no concurre la finalidad de explotación sexual porque la propia agraviada había declarado que la procesada le sugirió tener sexo con clientes en una única oportunidad: mientras que el 25% considera que dicha apreciación es correcta.

Figura N°4.

d) ¿El Recurso de Nulidad N° 2349-2014, de la Sala Penal Permanente señala que la explotación laboral no se determina únicamente por la cantidad de horas trabajadas, sino por el desgaste físico que produzcan en la persona agraviada; Ud. lo considera correcto?

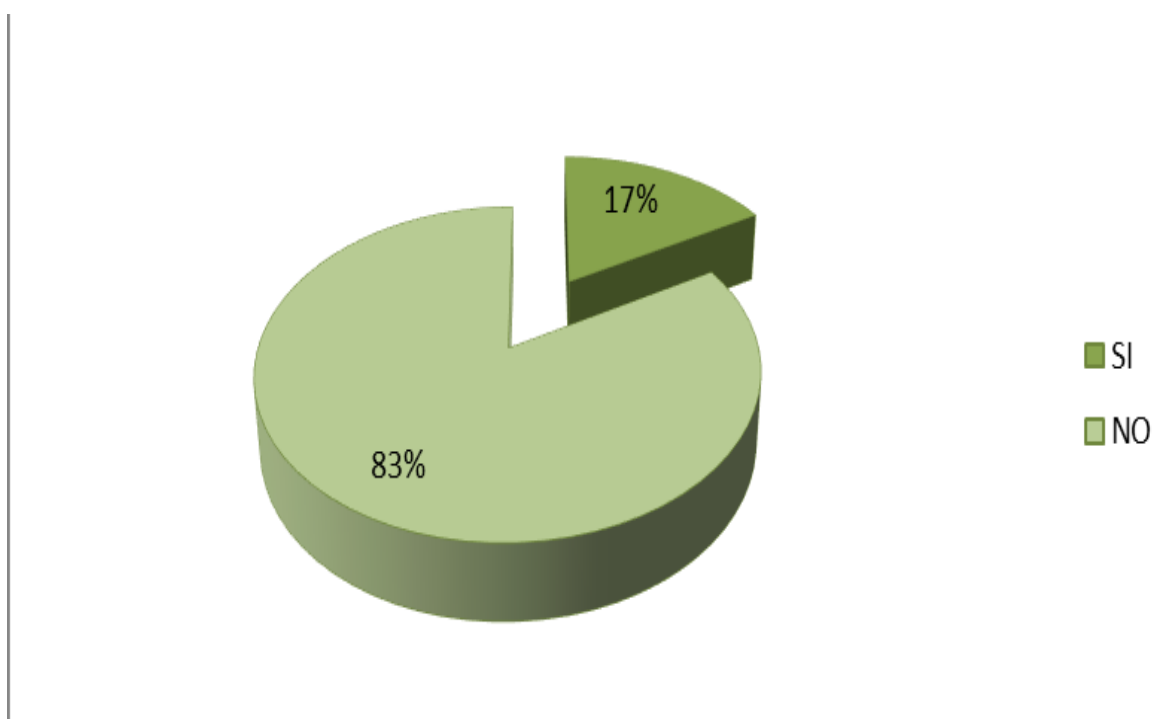


Elaboración Propia

Interpretación: Del presente gráfico se puede describir una contribución valiosa para el trabajo de investigación, debido a que el 58% de la población encuestada no considera correcto lo señalado en el Recurso de Nulidad N° 2349-2014, de la Sala Penal Permanente, en la que especifica que la explotación laboral no se determina únicamente por la cantidad de horas trabajadas, sino por el desgaste físico que produzcan en la persona agraviada; mientras que solo el 42% considera que esta correcta esta interpretación.

Figura 5.

e) Respecto al delito de trata de personas ¿Está de acuerdo con la sentencia R. N. N°2349-2014 Madre de Dios en donde si bien la Sala reconoció que las horas de trabajo excedían las condiciones normales, también concluyó que el hacer de dama de compañía dedicada solamente a beber con los clientes no podría considerarse una labor agotadora?



Elaboración Propia

Interpretación: La cantidad porcentual del siguiente gráfico nos especifica que el 83% de los encuestados no están de acuerdo con la sentencia R. N. N°2349-2014 Madre de Dios en donde si bien la Sala reconoció que las horas de trabajo excedían las condiciones normales, también concluyó que el hacer de dama de compañía dedicada solamente a beber con los clientes no podría considerarse una labor agotadora, mientras solo el 17% en tal aspecto está de acuerdo con tal jurisprudencia.

3.1. Discusión

Los resultados obtenidos, se han discutido considerando los objetivos específicos y el objetivo general del proceso investigativo, teniendo en cuenta también, al análisis del marco teórico y los resultados estadísticos.

- **OBJETIVO GENERAL:**
- **Determinar si el tratamiento que recibe el delito de trata de personas en la jurisprudencia de la Corte Suprema es el adecuado para la persecución y sanción del mismo, a raíz de la R.N.Nº 2349-2014-Madre de Dios.**

Para cumplir con este objetivo utilizamos el marco teórico, así como la variable independiente sobre situación actual del delito de trata de personas y como variable dependiente en el Perú, la cual es definida internacionalmente como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Por otro lado los encuestados manifiestan respecto de la pregunta ¿Está de acuerdo con la sentencia R. N. N°2349-2014 Madre de Dios en donde si bien la Sala reconoció que las horas de trabajo excedían las condiciones normales, también concluyó que el hacer de dama de compañía dedicada solamente a beber con los clientes no podría considerarse una labor agotadora? La cantidad porcentual nos señalan que el 83% de los encuestados no están de acuerdo con la sentencia R. N. N°2349-2014 Madre de Dios en donde si bien la Sala reconoció que las horas de trabajo excedían las condiciones normales, también concluyó que el hacer de dama de compañía dedicada solamente a beber con los clientes no podría considerarse una labor agotadora, mientras solo el 17% en tal aspecto está de acuerdo con tal jurisprudencia.

De los resultados obtenidos de la presente investigación, se puede deducir que es lamentable que a raíz de sentencia R.N.N 2349-2014-Madre de Dios no se haya dado un buen tratamiento, aplicación e interpretación para la persecución y sanción del delito de trata de personas, generando a posteriori una impunidad en todas sus esferas, y desde luego el incumplimiento del Estado en salvaguardar la dignidad de la persona como fin supremo del estado y la sociedad, regulado en el artículo uno de la constitución política del país, así como vulnerar derechos humanos por una incorrecta aplicación de la norma.

- **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- **Establecer si la regulación del delito de trata de personas en la legislación Peruana es adecuada.**

La legislación peruana ha regulado todas las formas o modalidades que puede darse en el delito de trata de personas, e incluso en un contexto de crimen organizado, en ese sentido la regulación es adecuada, debido a que se ha tomado el contexto de las normas internacionales y convenios; ahora bien, si la norma es la adecuada, los jueces al aplicar, existe una disyuntiva, en ese sentido al formularse la interrogante a nuestra muestra respecto si se debe tener en cuenta la jurisprudencia para resolver casos de delitos frente a la trata de personas, los resultados nos indican que el 67% de encuestados debe tenerse en cuenta la jurisprudencia para resolver delito de trata de personas, mientras el 25% está un poco de acuerdo y un 8% considera que si o si debe tomarse en cuenta, lo cual genera a que si la jurisprudencia que emite la Corte Suprema, puede estar errada los jueces o abogados pueden ampararse a ella, generando una impunidad, como en el caso de la jurisprudencia emitida en el cuestionado del Recurso de Nulidad. N°2349-2014 Madre de Dios

- **Conocer si la definición que tiene la Corte Suprema del tipo de trata de personas protege a la víctima de este tipo penal y por ende no se atenta contra los derechos humanos.**

Respecto a la corroboración del objetivo específico se ha formulado la interrogante si se considera errada el Recurso de Nulidad N° 2349-2014, de la Sala Penal Permanente donde señala que no concurre la finalidad de explotación sexual porque la propia agraviada había declarado que la procesada le sugirió tener sexo con clientes en una única oportunidad, a fin de tener en cuenta si el concepto que tiene la Corte Suprema no atenta contra los derechos humanos; es preciso señalar que los datos concuerdan con uno de los perfiles de nuestra limitación problemática, en tanto, corrobora que las definiciones que tiene la Corte Suprema viene vulnerado derechos fundamentales, en ese sentido el 75% de magistrados consideran errada el Recurso de Nulidad N° 2349-2014, de la Sala Penal Permanente donde señala que no concurre la finalidad de explotación sexual porque la propia agraviada había declarado que la procesada le sugirió tener sexo con clientes en una única oportunidad: mientras que el 25% considera que dicha apreciación es correcta.

En consecuencia, de los datos obtenidos podemos concluir que la definición del delito de trata de personas que tiene la Corte Suprema no va de acuerdo a los a los conceptos dados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que genera desde ya al tener un concepto errado una vulneración a los derechos humanos, debido a que la tipificación y la sanción respectiva no se dará en la práctica por un mal concepto.

- **Analizar si los jueces resuelven los casos de trata de personas con observancia de a la normatividad convencional**

Para cumplir con este objetivo utilizamos el marco teórico, así como la variable independiente sobre situación actual del delito de trata de personas y como variable dependiente en el Perú, la cual es definida internacionalmente como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos

o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

El derecho convencional ha permitido a raíz de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los tratados internacionales se respeten y puedan establecerse en la normatividad interna de cada país; sin embargo, los jueces al momento de formularse la interrogante, respecto del Recurso de Nulidad N°2349-2014, si se viene tomando los criterios internacionales, los jueces han respondido que no; lo cual genera mucha preocupación, en ese sentido se ha formulado la interrogante si considera que el delito de trata de personas es una violación a los derechos humanos; los resultados nos indican que el 100% de los encuestados afirman que el delito de trata de personas es un delito de violación a los derechos humanos, razón por la cual, la Corte Suprema, pese a que sus jueces son del concepto que el delito de trata de personas, debe ser resuelto a la luz del derecho convencional.

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES

En el presente trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones que responden a los objetivos y a la pregunta que motivó el estudio.

- ✓ Respecto al objetivo que si el tratamiento que recibe el delito de trata de personas en la jurisprudencia de la Corte Suprema es el adecuado para la persecución y sanción del mismo, a raíz de la R.N.Nº 2349-2014-Madre de Dios, se concluye que no se esté dando un buen tratamiento, aplicación e interpretación para la persecución y sanción del delito de trata de personas, lo que genera a posteriori una impunidad en todas sus esferas, y desde luego un incumplimiento del Estado en salvaguardar la dignidad de la persona como fin supremo del estado y la sociedad, regulado en el artículo 1 de la constitución política del país, así como vulnerar derechos humanos por una incorrecta aplicación de la norma.
- ✓ De lo comprendido en nuestro marco teórico, podemos concluir que la definición del delito de trata de personas que tiene la Corte Suprema no va de acuerdo a los a los conceptos dados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que genera desde ya al tener un concepto errado una vulneración a los derechos humanos, debido a que la tipificación y la sanción respectiva no se dará en la práctica por un mal concepto.
- ✓ Respecto de lo analizado se colige que pese a tener el concepto establecido de trata de personas esta no han contribuido a una disminución de la erradicación del delito de trata de personas; por lo que los resultados obtenidos nos conlleva a concluir que sin lugar a duda necesitamos mejores jurisprudencias que permitan a los operadores de derecho sancionar los delitos de trata de personas, cuando la norma no lo pueda regular, esto a la luz del derecho internacional, con la finalidad de evitar impunidad.
- ✓ El delito de trata de personas debe estar conceptualizado conforme a las normas internacionales como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de

una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación

CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES

- ✓ La problemática planteada en esta investigación es determinar si es adecuado el tratamiento que recibe el delito de trata de personas en la jurisprudencia de la Corte Suprema para la persecución y sanción del mismo, a raíz de la R.N.Nº 2349-2014-Madre de Dios, así como establecer si la regulación del delito de trata de personas en la Legislación Peruana es la adecuada asimismo conocer si la definición que tiene la Corte Suprema del tipo de trata de personas protege a la víctima de este tipo penal y por ende no se atenta contra los derechos humanos; no obstante la realidad es de mucha preocupación debido a que no se esté dando un buen tratamiento, aplicación e interpretación para la persecución y sanción del delito de trata de personas, lo que genera a posteriori una impunidad en todas sus esferas; asimismo si bien existe el Protocolo Palermo y esta ha sido ratificado por el Perú, en la praxis nuestra Corte Suprema viene incumpliendo los parámetros que esta establece, a las luz también de las jurisprudencia del derecho internacional, verbigracia tenemos la sentencia R. N. N°2349-2014 Madre de Dios, donde se demuestra una clara impunidad, en tanto que la sentencia colige que la voluntad de la tratante hacia la víctima debía ser expresa y que las horas que trabajó la menor no se podía considerar como explotación porque no hubo agotamiento de ésta; en ese sentido recomendamos que los jueces de la Corte Suprema del Perú, respeten los tratados internacionales, así como cumplan con los normas internacionales del cual nuestro país es parte, asimismo sugerimos que el Congreso presente proyectos de ley en favor de las víctimas de tratas de personas y se pueda combatir el delito de trata de personas a luz del derecho internacional.
- ✓ Por último se debe preparar a los abogados especialistas en derecho penal, por lo que recomendamos que la Comunidad Jurídica debe recibir capacitaciones gratuitas por parte de su Ilustre Colegio de Abogados de todo el país o de los Colegios donde pertenecen, y de ser necesario llevar capacitaciones promovidas por las facultades de derecho de la universidades privadas o pública en cada departamento, que permitan cultivar conocimiento a los abogados sobre una mejor defensa y análisis del delito de trata de

personas, además de una mejor preparación por parte de los fiscales que ven este tipo de casos, con la finalidad de evitar impunidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Amiel, A. (2006). Integrating a Human Rights Perspective into the European Approach to Combating the Trafficking of Women for Sexual Exploitation. Buffalo Human Rights Law Review 12: 5.
2. Acharya, A y Jarquín, S. (2005). Globalización y tráfico de mujeres: Una lección desde México. México: Editorial Migración y Desarrollo.
3. Acharya, A. (2008). Un análisis conceptual del tráfico de mujeres y su tipología de origen”: Editorial Andamios.
4. Bauché, H. (2012). Trata de Personas. Cosificación y negación de la persona como sujeto de derecho. Lima, Perú: Editorial pirhua.
5. Bustos, R. (2001). Manual de Derecho Penal, Parte Especial.
6. Cardozo, L y Sandra, M. (2010). Lectura teórica sobre la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas para combatir la trata de personas en Colombia.

Recuperado de: <http://www.rigys.org/estudio/0087.pdf>.

7. Comisión nacional de los derechos humanos y Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A. C. (2009). Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México”.

Recuperado de:

[//www.ceidas.org/images/stories/ceidas/documentos/informes_nacionales_e_internacionales/2009/pdf/19Diagnostico_Trata_de_Personas_CEIDAS-CNDH.pdf](http://www.ceidas.org/images/stories/ceidas/documentos/informes_nacionales_e_internacionales/2009/pdf/19Diagnostico_Trata_de_Personas_CEIDAS-CNDH.pdf).

8. Protocolo de Palermo (2001)

Recuperado de:

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf

9. Ezeta, F. (2006). La trata de personas: aspectos básicos, México Organización Internacional para las Migraciones, mayo de 2006.

Recuperado de:

<http://www.oas.org/atip/reports/trata.aspectos.basicos.pdf>. 11 de noviembre de 2011.

10. Gavidia, L. (1999). Derecho Internacional Público, quinta edición: Editorial Temis.
11. Instituto Internacional de los Derechos Humanos (2003). Esclavitud moderna: Tráfico sexual en las Américas.
12. López, Ir. (2005). Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, estudio exploratorio. España : Editorial Federación de Mujeres Progresistas.
13. Novak, F y Salmón, E. (2004). Las Obligaciones Internacionales del Perú en Materia de Derechos Humanos, Los Tratados de derechos Humanos, Capacitación en acceso a la justicia y procesamiento de violaciones de derechos humanos. Instituto de Democracia y Derechos Humanos. Pontificia Universidad Católica del Perú.
14. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Manual para la Lucha contra la Trata de Personas. Programa Mundial contra la Trata de Personas.
15. Ortiz de Zevallos Roedle, Gonzalo. "El Delito de Trata de Personas" Material de trabajo N°06. Taller organizado por la Escuela del Ministerio Público los días 28, 29 y 30 de septiembre del 2005. Lima.
16. Real Academia Española: Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición.

17. Rivera, G. (2009). Trata de Personas. Esclavitud Moderna en todas sus dimensiones. Primera Edición: Editorial pirhua.
18. Rodríguez, J. (2005). Derecho Penal. Parte General, tomo I. Madrid.
19. Salina, S. (2000). Curso de Derecho Penal Peruano, parte Especial, tomo II. Lima, Perú: Editorial Palestra.
20. Todres, J. (2009). Law, otherness, and human trafficking. Santa Clara Law Review.
21. Srikantiah, J. (2007). Perfect victims and real survivors: The iconic victim in domestic human trafficking law. Boston University Law Review.
22. Villa, S. (2004). Derecho Penal Parte Especial. Lima, Perú: Editorial San Marcos.
23. Vázquez, S. (2001). Derecho Internacional Público, séptima edición. México: Editorial Porrúa.

ANEXO: ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

ESCUELA DE POST GRADO

ENCUESTA: SITUACIÓN ACCTUAL DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN EL PERÙ

INSTRUCCIONES: Leer las siguientes interrogantes, y marcar con (x) o circulo (o) las respuestas que Ud. crea conveniente; las respuestas ayudará analizar la situación actual del delito de trata de personas en el Perú

DATOS GENERALES

CARGO y/o FUNCIÓN:

ABOGADO PENALISTA ()

JUEZ COLEGIADO DE CHICLAYO ()

- 1. Considera usted que el delito de trata de personas es una violación a los derechos humanos**
 - a) Si
 - b) No

- 2. ¿Se debe tener en cuenta la jurisprudencia para resolver casos de delitos frente a la trata de personas?**
 - a) Nada
 - b) Poco
 - c) Lo suficiente
 - d) Bastante

3. **¿Considera errada el Recurso de Nulidad N° 2349-2014, de la Sala Penal Permanente donde señala que no concurre la finalidad de explotación sexual porque la propia agraviada había declarado que la procesada le sugirió tener sexo con clientes en una única oportunidad?**
- a) Si
- b) No
4. **¿El Recurso de Nulidad N° 2349-2014, de la Sala Penal Permanente señala que la explotación laboral no se determina únicamente por la cantidad de horas trabajadas, sino por el desgaste físico que produzcan en la persona agraviada; Ud. lo considera correcto?**
- a) Si
- b) No
5. **Respecto al delito de trata de personas ¿Está de acuerdo con la sentencia R. N. N°2349-2014 Madre de Dios en el que libera de culpa a la administradora de un bar acusada de trata de personas en perjuicio de una adolescente, por cuanto se argumentó que la voluntad de la tratante hacia la víctima debía ser expresa y que las horas que trabajó la menor no se podía considerar como explotación porque no hubo agotamiento de ésta .**
- a) Si
- b) No